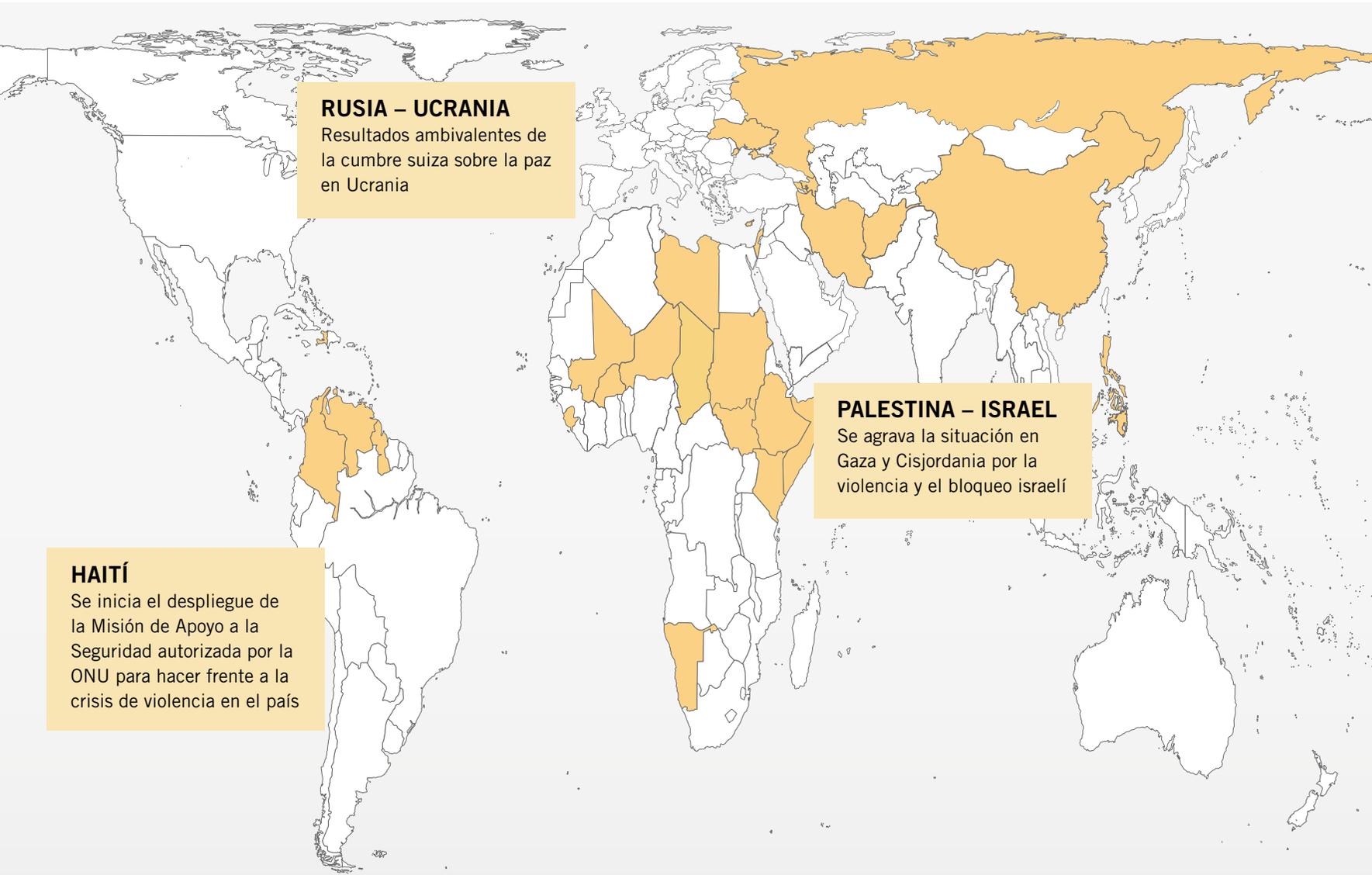


Escenarios de riesgo y oportunidades de paz

Julio 2024

èc̃p escola de cultura de pau

UAB
Universitat Autònoma de Barcelona



Otros casos analizados en esta edición:

ÁFRICA

África Subsahariana
África Occidental
Chad
Etiopía – Somalia
Kenya
Libia
Malí
Namibia y Sierra Leona
Sahel Occidental
Sudán
Sudán del Sur

AMÉRICA

Colombia
Venezuela – Guyana

ASIA Y EL PACÍFICO

Afganistán
China – Filipinas
Tailandia

EUROPA

Armenia – Azerbaiyán
Chipre

ORIENTE MEDIO

Irán
Israel – Hezbollah

Con el apoyo de:

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Generalitat de Catalunya

- *Escenarios de riesgo y oportunidades de paz* es una publicación
- trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o
- cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas
- de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Este número
- abarca el periodo desde abril hasta el 5 de julio de 2024.

Escenarios de riesgo y oportunidades de paz es una publicación trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Es una herramienta analítica que integra la perspectiva de género interseccional y que pretende ser un recurso útil para actores educativos y políticos y la ciudadanía en su conjunto, contribuyendo a la comprensión de estos contextos y a la acción temprana. Este número abarca el periodo entre abril y el 5 de julio de 2024.

Casos destacados:

PALESTINA – ISRAEL: Se agrava la situación en Gaza y Cisjordania por la violencia y el bloqueo israelí

HAITÍ: Se inicia el despliegue de la Misión de Apoyo a la Seguridad autorizada por la ONU para hacer frente a la crisis de violencia en el país

RUSIA – UCRANIA: Resultados ambivalentes de la cumbre suiza sobre la paz en Ucrania

Otros casos analizados en esta edición:

ÁFRICA

ÁFRICA SUBSAHARIANA: La región vuelve a ser la más afectada por el desplazamiento forzado interno en el mundo en 2023

ÁFRICA OCCIDENTAL: La ruta migratoria hacia el Estado español vía las Islas Canarias se convierte en la más mortífera del mundo en 2024

CHAD: Mahamat Déby gana las elecciones presidenciales en medio de un clima de fraude y de represión contra la oposición poniendo fin a la transición

ETIOPÍA – SOMALIA: Se inician contactos entre ambos países con la facilitación de Turquía y Qatar para resolver la crisis provocada por el memorando entre Etiopía y Somalilandia

KENYA: Al menos 30 personas mueren en protestas antigubernamentales sin precedentes contra los incrementos de impuestos

LIBIA: La renuncia del enviado especial de la ONU evidencia riesgos de cronificación del bloqueo político

MALÍ: La Junta Militar anuncia la suspensión de las elecciones y de todas las actividades políticas en el país

NAMIBIA Y SIERRA LEONA: Avances en los derechos de la infancia y la comunidad LGTBQ+

SAHEL OCCIDENTAL: Prosigue la reconfiguración de las alianzas de seguridad y defensa en la región

SUDÁN: Más de la mitad de la población padece inseguridad alimentaria aguda por la guerra, el peor nivel jamás registrado en el país

SUDÁN DEL SUR: Persisten las críticas al Ejecutivo por el incumplimiento de las condiciones para unas elecciones presidenciales justas y democráticas

AMÉRICA

COLOMBIA: Se inician las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado Segunda Marquetalia

VENEZUELA – GUYANA: Ambos Gobiernos se reúnen con el presidente de la Corte Internacional de Justicia para abordar la resolución del conflicto por el Esequibo

ASIA

AFGANISTÁN: Doha III, una victoria talibán a costa de los derechos de las mujeres

CHINA – FILIPINAS: Se incrementa drásticamente la tensión entre ambos países tras un grave incidente naval

TAILANDIA: Se reanuda el proceso de paz en el sur del país

EUROPA

ARMENIA – AZERBAIYÁN: Protestas en Armenia contra el acuerdo de delimitación fronteriza entre Bakú y Ereván, en medio de avances y obstáculos para un acuerdo de paz

CHIPRE: Una nueva iniciativa bicomunal de mujeres llama a un rediseño inclusivo del proceso negociador, en un contexto de creciente frustración por el estancamiento del diálogo

ORIENTE MEDIO

IRÁN: Se impone el candidato moderado en las elecciones presidenciales en un contexto regional de intensa tensión con Israel

ISRAEL – HEZBOLLAH: La intensificación de las hostilidades y la retórica amenazante agravan el riesgo de escalada



Fuente: UNRWA / Ashraf Amra

PALESTINA – ISRAEL

Se agrava la situación en Gaza y Cisjordania por la violencia y el bloqueo israelí

La situación en Gaza continuó deteriorándose dramáticamente a causa de la operación militar israelí y el bloqueo impuesto para el acceso de la ayuda humanitaria, con gravísimas consecuencias en civiles que están afectando al presente y futuro de la población palestina. Según los datos de OCHA, en tan solo nueve meses – desde el pasado 7 de octubre y hasta el 5 de julio– **habían muerto casi 38.000 palestinos y palestinas**, mientras que en el mismo período habrían fallecido unas 1.200 personas en Israel – incluyendo extranjeras–, la inmensa mayoría en octubre de 2023, y unos 300 soldados israelíes en Gaza. La cifra de muertes palestinas del último trimestre superaría las 5.000, mientras que la cifra total de palestinas y palestinos heridos desde octubre superaba ya las 87.000. Una estimación de la que se hizo eco la prestigiosa publicación The Lancet apuntaba que, teniendo en cuenta la proporción de víctimas mortales indirectas respecto a las directas que suele existir en los conflictos armados actuales, **la cifra de personas fallecidas a causa de la reciente violencia en Gaza podría ascender hasta las 186.000 personas** –y este número era considerado como una estimación “conservadora”.

En tan solo nueve meses, la operación israelí en Gaza ha causado la muerte a casi 38.000 palestinos y palestinas y heridas a más de 87.000

La violencia, el hambre y la falta de acceso a atención de salud siguieron afectando de manera especial a los niños y las niñas. **Save the Children alertaba en junio que había unos 21.000 menores palestinos desaparecidos en Gaza**, ya sea atrapados bajo los escombros, detenidos, sepultados en fosas comunes o perdidos de sus familias. El director de la agencia de la ONU para la población refugiada palestina, UNRWA, Philippe Lazzarini, también advertía que **cada día diez niños y niñas en Gaza perdían una o sus dos piernas**. El informe anual del secretario general de Naciones Unidas sobre menores y conflictos –publicado en junio y que hace referencia a hechos acontecidos en 2023–, **incluyó a las fuerzas militares y de seguridad israelíes entre los actores que cometieron graves vulneraciones contra menores** por asesinar y causar heridas a niños y niñas y por sus ataques a hospitales y escuelas. También señaló a las brigadas Al-Quds de la Jihad Islámica y a las Izz al-Din al-Qassam de Hamas por muertes, heridas y secuestro de menores. El informe verificó la comisión de vulneraciones graves contra 4.247 menores palestinos y 113 menores israelíes. Paralelamente, agencias de la ONU y organizaciones internacionales continuaron

denunciando a Israel por la obstrucción en el acceso de ayuda humanitaria y la creación de condiciones para someter a una hambruna a la población palestina.

Entre los hechos del último trimestre, cabe destacar que a principios de mayo Israel concretó su anunciada ofensiva terrestre sobre Rafah, que además de muerte y destrucción derivó en el cierre del paso que conecta con Egipto y del acceso de ayuda humanitaria. La operación militar israelí motivó nuevos desplazamientos masivos de población palestina: cerca de un millón de personas se vieron obligadas a huir otra vez en un contexto de condiciones humanitarias cada vez más críticas. La acción israelí motivó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que investiga la comisión de hechos constitutivos de genocidio en Gaza, emitiera una tercera orden con medidas provisionales. Tras recibir una nueva petición para la adopción de medidas urgentes por parte de Sudáfrica, el 24 de mayo la **CIJ exigió a Israel que detuviera inmediatamente su ofensiva militar en el área de Rafah**, así como otras acciones que pudieran infligir a la población palestina unas condiciones de vida que llevaran a la destrucción física total o parcial. Pocos días antes, el 20 de mayo, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, había emitido cinco órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y contra su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra tres dirigentes de Hamas –Yahia Sinwar, jefe de la milicia en Gaza; Mohamed Diab Ibrahim al Marsi, comandante del ala militar del grupo; y contra Ismail Haniyah, su máximo dirigente político– por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad. La medida impulsada por Khan –que denunció una campaña de presiones– fue destacada como un **hecho inédito por señalar a los dos altos cargos de Israel y perseguir por primera vez a dirigentes de un país aliado de Occidente**.

Pese a estas disposiciones de tribunales internacionales y del trabajo de otros mecanismos y organizaciones para denunciar y documentar las vulneraciones al derecho internacional humanitario y los derechos humanos, continuaron conociéndose y produciéndose gravísimos hechos de violencia durante el trimestre. Entre otros, en abril se informó del hallazgo de fosas comunes tras las semanas de asedio israelí al hospital al-Shifa, con cuerpos con señales de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Durante el trimestre, en paralelo a la ofensiva en Rafah, Israel continuó con sus incursiones en el norte de la Franja y en torno a la ciudad de Gaza. Hamas, por su parte, lanzó en mayo un ataque contra el cruce de Kerem Shalom, que resultó en la muerte de cuatro soldados israelíes, y disparó cohetes contra Tel Aviv –en la primera acción de este tipo desde principios de año. Poco después de esta última acción, Israel lanzó un ataque contra un campo de población desplazada en Tal al-Sultan, en el sur de Gaza, en una ofensiva que provocó el incendio de tiendas y la muerte de decenas de personas, incluyendo menores. En junio, destacó especialmente la operación israelí en el campo de refugiados de Nusseirat (8 de junio) que desembocó en la salida de Gaza de cuatro de los rehenes retenidos por Hamas– otro centenar permanecería en

manos del grupo– y en la muerte de 274 palestinas y palestinos. A finales de junio, Israel forzó el desplazamiento de otras 80.000 personas del este de la ciudad de Gaza, tras emitir nuevas “órdenes de evacuación”. Según ICG, el 78% del territorio de la Franja estaría sometido a este tipo de órdenes por parte de Israel.

Violencia alarmante en Cisjordania

La situación en Cisjordania y Jerusalén Este también continuó empeorando. Naciones Unidas advirtió sobre “alarmantes niveles de violencia” y entre el 19 de marzo y el 10 de junio documentó la muerte de un centenar de palestinos a manos de las fuerzas de seguridad y, en algunos casos, de colonos israelíes; y también constató la muerte de seis israelíes en hechos ocurridos en Israel y Cisjordania en el mismo período. Balances indican que desde octubre y hasta abril, al menos 470 palestinos habían muerto en acciones de las fuerzas israelíes o de colonos. El Gobierno israelí también intensificó sus políticas de expansión de asentamientos y anexión de facto de territorio palestino, a través del impulso de una serie de medidas que reflejaron la influencia del movimiento de colonos y de los sectores más ultraderechistas en el Ejecutivo de Netanyahu. Israel aprobó medidas para “legalizar” asentamientos declarados ilegales previamente por los propios tribunales israelíes –según la ley internacional todos los asentamientos son ilegales–, **transfirió competencias a autoridades civiles israelíes para el control de la zona C de Cisjordania** –bajo control militar israelí, según los acuerdos de Oslo– y anunció planes para la construcción de nuevas colonias. Adicionalmente, a finales de junio, las autoridades israelíes formalizaron la apropiación ilegal de más de 1.200 hectáreas en la zona del Valle del Jordán –en la zona este de Cisjordania, cerca de Jericó–, en el mayor movimiento de este tipo desde los acuerdos de Oslo de 1993. Las autoridades israelíes emitieron un decreto declarando el área como propiedad estatal. **Peace Now** alertó que el movimiento había estado precedido de otras apropiaciones similares en febrero y marzo, convirtiendo 2024 en el año en que Israel se ha anexionado de facto una mayor cantidad de territorio palestino desde los noventa. La ONG israelí y otras voces advirtieron que estas prácticas minan aún más las posibilidades de erigir un Estado palestino.

Perspectivas de cese el fuego

Los contactos para explorar un posible cese el fuego continuaron durante el último trimestre, aunque hasta el cierre de esta edición no se había anunciado un acuerdo al respecto. A principios de mayo Hamas accedió a una propuesta avanzada por Qatar y Egipto, que luego fue rechazada por Israel. A finales de ese mes el presidente de EEUU anunció una nueva propuesta de tres etapas, que posteriormente (el 10 de junio) fue respaldada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través de la **resolución 2735** (Véase la Tabla 1). Según el plan, en una primera fase se pondría en marcha un alto el fuego inmediato y total que iría acompañado de la liberación de un primer grupo de rehenes (mujeres, ancianos y heridos)

y la excarcelación de prisioneros palestinos, además de la retirada de las fuerzas israelíes de las áreas pobladas de Gaza. En una segunda fase se instalaría un fin permanente de las hostilidades a cambio de la liberación de los rehenes restantes y del repliegue total de la Franja por parte de Israel. En la tercera fase se procedería a implementar un plan para la reconstrucción de Gaza y se retornarían los cuerpos de rehenes muertos que aún estuvieran en la Franja.

Aunque Joe Biden describió el plan como una iniciativa israelí, Netanyahu y otras autoridades israelíes cuestionaron esta versión, emitieron mensajes contradictorios y/o se distanciaron de los términos planteados por el Gobierno de EEUU. Netanyahu aseguró estar dispuesto a un acuerdo parcial para conseguir la liberación de algunos rehenes, pero dejó claro que su Gobierno solo aceptaría una pausa y que la guerra continuaría hasta la eliminación total de Hamas. Ministros de los partidos más extremos del Gobierno israelí, como Bezalel Smotrich (Finanzas) y Itamar Ben-Gvir (Seguridad Nacional) rechazaron abiertamente el plan y amenazaron con abandonar la coalición gobernante si se ponía en marcha. Cabe destacar que las discusiones en el Consejo de Seguridad sobre la propuesta de cese el fuego se dieron en un escenario marcado por la operación israelí para liberar a los cuatro rehenes (8 de junio) y por la dimisión de Benny Gantz y Gadi Eisenkot del Ejecutivo de Emergencia instalado por Netanyahu en octubre pasado (9 de junio), hecho que condujo a la disolución del gabinete de guerra (17 de junio) en medio de críticas internas al primer ministro por la ofensiva en Gaza.

En paralelo a estos hechos, Hamas sugirió varias modificaciones a la propuesta promovida por EEUU y Washington admitió que era posible trabajar en torno a algunas de las demandas del grupo palestino. **A principios de julio trascendió que Hamas había hecho un nuevo planteamiento, calificado como un "avance" por EEUU.** Biden abordó la propuesta con Netanyahu, mientras que un alto cargo de Hamas se reunió con el líder de Hezbollah para analizar las negociaciones, en un contexto regional marcado por la intensificación de las tensiones en el último trimestre (véase los casos de Israel-Hezbollah e Irán en la sección de Oriente Medio). Así, se esperaban nuevas reuniones de los



Fuente: UNRWA/ Fadi Thabet

equipos negociadores en la capital qatarí, Doha, con participación de mediadores de ese país, Egipto y EEUU. Las informaciones apuntaban a un cierto consenso en un marco de acuerdo y en la necesidad de abordar ahora los pasos para la implementación. Según ha trascendido, una de las principales diferencias es cómo gestionar la transición de la primera a la segunda fase, que según el plan debería negociarse en las seis primeras semanas de cese el fuego. **Hamas ha insistido en garantías sobre un alto el fuego de carácter permanente, pero habría accedido a que no fuera una precondition para la firma del acuerdo** y que pudiera negociarse durante esta primera fase.

Finalmente, cabe destacar que durante el trimestre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó un **borrador de resolución presentado por Argelia sobre la incorporación del Estado palestino como miembro de pleno derecho en la organización internacional** –donde ostenta estatus de Estado observador desde 2012. No obstante, la iniciativa fue bloqueada por el veto de EEUU, que siguió firmemente alineado con los intereses israelíes en este ámbito. Semanas más tarde, la inmensa mayoría de la Asamblea General (143 votos a favor, nueve en contra y 25 abstenciones) se mostró favorable a la membresía de Palestina en Naciones Unidas e instó al Consejo de Seguridad a reconsiderar su decisión. En paralelo, algunos países europeos –entre ellos España, Irlanda y Noruega– optaron por sumarse al reconocimiento diplomático al Estado palestino, elevando así a 145 el número de países que han optado por esta medida, según datos a junio de 2024.

Tabla 1. Votaciones sobre Palestina en el Consejo de Seguridad de la ONU desde octubre de 2023 a junio de 2024

| FECHA | DOCUMENTO | PENHOLDER* | VOTACIÓN | A FAVOR | EN CONTRA Y VETOS | ABSTENCIONES |
|----------|---------------------|---|----------|--|-----------------------------------|---|
| 16/10/23 | S/2023/772 | Rusia | 5-4-6 | China, Gabón, Mozambique, Rusia, EAU | Francia, Japón, Reino Unido, EEUU | Albania, Brasil, Ecuador, Ghana, Malta, Suiza |
| 18/10/23 | S/2023/773 | Brasil | 12-1-2 | Albania, Brasil, China, Ecuador, Francia, Gabón, Ghana, Japón, Malta, Mozambique, Suiza, EAU | EEUU | Rusia, Reino Unido |
| 25/10/23 | S/2023/792 | EEUU | 10-3-2 | Albania, Ecuador, Francia, Gabón, Ghana, Japón, Malta, Mozambique, Suiza, Reino Unido, EEUU | China, Rusia, EAU | Brasil, Mozambique |
| 25/10/23 | S/2023/795 | Rusia | 4-2-9 | China, Gabón, Rusia, EAU | Reino Unido, EEUU | Albania, Brasil, Ecuador, Francia, Ghana, Japón, Malta, Mozambique, Suiza |
| 15/11/23 | S/RES/2712** | Malta | 12-0-3 | Albania, Brasil, China, Ecuador, Francia, Gabón, Ghana, Japón, Malta, Mozambique, Suiza, EAU | | Rusia, Reino Unido, EEUU |
| 8/12/23 | S/2023/970 | EAU | 13-1-1 | Albania, Brasil, China, Ecuador, Francia, Gabón, Ghana, Japón, Malta, Mozambique, Rusia, Suiza, EAU | EEUU | Reino Unido |
| 22/12/23 | S/RES/2720 | EAU | 13-0-2 | Albania, Brasil, China, Ecuador, Francia, Gabón, Ghana, Japón, Malta, Mozambique, Suiza, EAU, Reino Unido | | Rusia, EEUU |
| 20/02/24 | S/2024/173 | Argelia | 13-1-1 | Argelia, China, Ecuador, Francia, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, Rep. Corea, Rusia, Sierra Leona, Eslovenia, Suiza | EEUU | Reino Unido |
| 22/03/24 | S/2024/239 | EEUU | 11-3-1 | Ecuador, Francia, EEUU, Japón, Malta, Mozambique, Reino Unido, Rep.Corea, Sierra Leona, Eslovenia, Suiza | Argelia, China, Rusia | Guyana |
| 25/03/24 | S/RES/2728 | E10 (Argelia, Ecuador, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, Rep.Corea, Sierra Leona, Eslovenia, Suiza) | 14-0-1 | Argelia, China, Ecuador, Francia, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, Reino Unido, Rep.Corea, Sierra Leona, Eslovenia, Suiza | | EEUU |
| 10/06/24 | S/RES/2735 | EEUU | 14-0-1 | Argelia, China, Ecuador, Francia, EEUU, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, Reino Unido, Rep.Corea, Sierra Leona, Eslovenia, Suiza | | Rusia |

* El término *penholder* ("portaplumas" en su traducción literal) hace referencia al papel desempeñado por uno de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que asume la tarea de liderar la negociación y el redactado de una resolución sobre un tema en particular.

** En negrita las votaciones que desembocaron en la aprobación de resoluciones por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Security Council Report, *What's in Blue*, 10 de junio de 2024.



Fuente: UNICEF/Harold Joseph

HAITÍ

Se inicia el despliegue de la Misión de Apoyo a la Seguridad autorizada por la ONU para hacer frente a la crisis de violencia en el país

A finales de junio **empezó el despliegue de la Misión de Apoyo a la Seguridad** (MSS, por sus siglas en inglés), aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en octubre de 2023 (Resolución 2699) con el objetivo de ayudar a combatir la actividad de las bandas armadas y restablecer la seguridad en Haití. A principios de julio habían llegado al país unos 400 efectivos de Kenia, país que lidera la misión, pero se espera que gradualmente alcance los **2.500 efectivos**, con la participación ya oficializada de ocho países (Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Chad, Jamaica y Kenia) y el compromiso o interés expresado por otros países como Antigua y Barbuda, Argelia, Canadá, Francia, Alemania, Trinidad y Tobago, Turquía, el Reino Unido o España. El coste aproximado de la misión será de unos 600 millones de dólares anuales, pero a finales de abril, el fondo fiduciario administrado por la ONU para la misión había recibido solamente 18 millones de dólares en contribuciones de Canadá, Francia y EEUU.

Existen importantes dudas y resistencias entre partidos políticos y sectores de la sociedad haitiana sobre la necesidad, legitimidad y desempeño de una misión militar internacional en el país

haitiano y nueve meses más tarde tras su aprobación en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero, además de los problemas en la financiación de la misión, también ha habido retrasos logísticos (especialmente en la construcción de la base militar en Puerto Príncipe) y problemas de orden jurídico y legal en Kenia respecto del despliegue de soldados en Haití. Además, la oleada de violencia que se inició a finales de febrero (coincidiendo precisamente con un viaje del entonces primer ministro haitiano a Kenia para discutir el rol de dicho país en la MSS), motivó una crisis política e institucional y agudizó la crisis humanitaria del país, dificultando y retardando a su vez el despliegue militar de la misión. Por otra parte, existen importantes dudas, reticencias y resistencias entre determinadas formaciones

políticas y sectores de la sociedad haitiana respecto de la necesidad, legitimidad y desempeño de una misión militar internacional, la cuarta en las últimas tres décadas. En 1994, bajo la resolución 940 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una misión de unos 25.000 efectivos liderada principalmente por EEUU con la participación de algunos países caribeños repuso en el cargo de presidente

a Jean Bertrand Aristide, despuesto en un golpe de estado en 1991 poco después de que se celebraran las primeras elecciones democráticas tras la dictadura de los Duvalier a mediados de los años 80. A principios de 2004, en el marco de una fuerte crisis política y de seguridad que comportó la salida forzosa del país de Aristide (en lo que algunas voces consideraron un golpe de Estado), la resolución 1529 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció la Fuerza Multinacional Provisional, liderada principalmente por EEUU, Canadá, Francia y Chile. Poco después, la resolución 1542 estableció la MINUSTAH (2004-2017), una misión que llegó a tener casi 9.000 militares y más de 4.300 policías. Además, en paralelo a estas intervenciones por parte de la comunidad internacional, Naciones Unidas ha tenido una presencia estable en el país a través de la Misión de Naciones Unidas en Haití (UNMIH, 1993-1996), la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH 2017-19), y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, 2019-actualmente operativa).

El incremento de la violencia y sus consecuencias humanitarias

Varios análisis sostienen que la principal dificultad a la que deberá hacer frente la MSS es el elevado nivel de violencia en Haití. Se estima que hay más de 200 bandas armadas que operan en el país, y diversas fuentes estiman que estos grupos controlan alrededor del 80% de la región metropolitana de la capital, Puerto Príncipe. Aún si la violencia asociada a las bandas armadas que operan en el país se ha incrementado drásticamente en los últimos años, especialmente tras el asesinato del expresidente Jovenel Moïse en julio de 2021, desde finales de febrero de 2024 el país vive una oleada de ataques y saqueos sin precedentes por parte de Viv Ansanm, una alianza entre las dos principales coaliciones de grupos armados del país (la G-9 y Familia y Aliados y su hasta recientemente principal rival Gpèp). Algunos análisis consideran que el principal objetivo de tal incremento de la violencia era la dimisión del primer ministro Ariel Henry, pero una vez lograda su renuncia (a mediados de marzo), los ataques a gran escala han continuado durante los meses de abril, mayo y junio con el fin de bloquear y dificultar el despliegue de la MSS. El principal líder de las bandas que operan en el país, el expolicía Jimmy Chérizier, también conocido como Barbecue, tildó de agresores e invasores a los efectivos de la MSS. Muchos de dichos ataques provocaron la destrucción de numerosas comisarías y puestos policiales en la región metropolitana de la capital, así como la muerte de una veintena de policías entre enero y mediados de junio, tal y como denunció la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, las bandas armadas también bloquearon sistemáticamente carreteras y calles y llevaron a cabo ataques contra el principal aeropuerto del país (que permaneció cerrado casi tres meses hasta su reapertura a partir de finales de mayo), el palacio presidencial (a principios de julio), la principal estación

energética y de combustible del país, así como decenas de escuelas, hospitales, farmacias, tiendas, edificios públicos y viviendas particulares.

En cuanto a las consecuencias humanitarias de la crisis de violencia que vive el país, a finales de junio, un informe de Naciones Unidas elaborado por un grupo de personas expertas independientes, señaló que en los tres primeros meses del 2024 la violencia relacionada con los grupos armados que operan en Haití se había incrementado drásticamente respecto del mismo período del año anterior. Así, en el primer trimestre del año, más de 2.500 personas habían muerto o resultado heridas (incluyendo casi un centenar de menores), alrededor de un 50% más que en el mismo período de 2023. El informe elaborado por las personas expertas –que incluye figuras como el Relator Especial sobre los derechos de las personas desplazadas internamente– señaló que en 2024 **había más de 578.000 personas desplazadas forzosamente**, convirtiendo a Haití en el país del mundo con un mayor número de personas obligadas a abandonar su hogar por el impacto de la violencia relacionada con el crimen. De tal cifra, que dobla la del año anterior, **310.000 personas son mujeres y niñas, y 180.000 son menores**. De hecho, según UNICEF, actualmente la violencia en el país provoca **el desplazamiento forzoso de un menor cada minuto**. Tan solo entre marzo y junio, el número de personas desplazadas pasó de 360.000 a casi 580.000. La Organización

En 2024 Haití era el país con mayor número de personas obligadas a abandonar su hogar por la violencia relacionada con el crimen

Mundial para las Migraciones (OMI) estima que alrededor de un 20% de dichas personas viven provisionalmente en 114 instalaciones (como escuelas, iglesias y edificios públicos) de Puerto Príncipe, buena parte de las cuales en áreas controladas por los grupos armados. Según la IOM, muchas de estas personas desplazadas internas viven en condiciones de hacinamiento y condiciones inadecuadas, sin higiene ni saneamiento básicos, y se enfrentan a una grave escasez de alimentos, agua, alojamiento y atención médica, incluida la falta de apoyo psicológico. Según UNFPA, en los últimos meses se ha detectado una alarmante tendencia de incremento de pensamientos suicidas entre la población desplazada.

Las precarias condiciones en las que viven las personas desplazadas las expone a explotación, abuso y trata por parte de las pandillas. En este sentido, numerosos análisis han señalado que los niveles de violencia sexual han crecido a un ritmo alarmante, y han denunciado que esta práctica es utilizada por parte de las bandas armadas como instrumento para aterrorizar y controlar a la población civil. Según varias organizaciones de la sociedad civil, los menores son uno de los colectivos más afectados por la situación de violencia en Haití. Naciones Unidas estima que más de 500.000 menores viven en áreas controladas por dichos grupos, lo que facilita su explotación, abuso y reclutamiento. Así, solamente en 2024 se habrían registrado más de 400 violaciones de los derechos humanos graves contra menores. En la misma línea, según UNICEF, **ente el 30 y el 50% de los**

miembros de las numerosas bandas armadas que operan en el país son menores, lo cual propicia una vulneración flagrante de sus derechos.

Según Naciones Unidas, los enfrentamientos continuos entre la Policía y las bandas armadas, así como los ataques contra población civil de estas últimas, han provocado un estado de terror permanente en la población y han restringido la libertad de movimiento y el acceso a los servicios básicos. Según el Gobierno, desde el dramático incremento de la violencia vinculada a las bandas armadas que se ha registrado en Haití desde abril de 2022, casi 1.700 escuelas han cerrado (algunas de ellas acogiendo a personas desplazadas por la violencia) interrumpiendo la escolarización de más de 500.000 menores.

En la misma línea, más de la mitad de los centros médicos de Puerto Príncipe y de la región de Artibonite están cerrados o no están en pleno funcionamiento. Incluso los centros médicos que están operativos no pueden garantizar la atención médica porque los bloqueos de carreteras o de calles por parte de bandas armadas impiden al personal médico llegar a su puesto de trabajo. A mediados de 2024, se estima que el 90% de la población en Haití vive bajo el umbral de la pobreza y que casi la mitad de la población padece hambre severa, un 18% de la cual se encuentra en situación de emergencia. Igualmente, tres millones de menores necesitan ayuda humanitaria con carácter urgente. Por otra parte, el incremento de las acciones armadas y el control territorial de las bandas también ha provocado un incremento sin precedentes en el surgimiento de grupos civiles de autodefensa que actúan al margen de la ley. A finales de marzo, Naciones Unidas advirtió que 528 personas sospechosas de tener vínculos con pandillas fueron linchadas en 2023, y que en los primeros meses del año otras 59 habían sido ejecutadas extrajudicialmente por dichos grupos.

A mediados de 2024, se estima que el 90% de la población en Haití vive bajo el umbral de la pobreza y que casi la mitad de la población padece hambre severa

La situación política del país

En el plano político, **a finales de abril el primer ministro Ariel Henry renunció formalmente al cargo**, aunque ya se había comprometido a ello a mediados de marzo tras constatar la pérdida de apoyos entre la comunidad internacional y entre los partidos políticos haitianos y en un contexto de creciente violencia y control territorial por parte de las bandas armadas. A pesar de que el Gobierno había declarado el estado de emergencia y decretado toques de queda nocturnos para hacer frente a la oleada de

violencia que se desató en el país desde finales de febrero, las fuerzas de seguridad no pudieron revertir la situación y las bandas armadas tomaron el control del principal aeropuerto de Haití y negaron la entrada de Henry al país a su regreso de Kenya (país que había visitado para discutir el despliegue de la MSS), por lo que este se vio obligado a aterrizar y permanecer en Puerto Rico. Al día siguiente de la renuncia de Henry, fue establecido el Consejo Presidencial de Transición (CPT), creado mediante un acuerdo de las principales formaciones políticas haitianas facilitado por la Comunidad del Caribe (CARICOM) el 11 de marzo, y cuyas principales funciones son el nombramiento de un nuevo primer ministro que conforme un nuevo gobierno y la creación de las condiciones

adecuadas para la celebración de nuevas elecciones –que serían las primeras desde 2016– y también para el despliegue de la MSS. El CPT especificó los principios clave de la transición, enfatizando la seguridad, la reforma constitucional y las elecciones, con un período de transición de 22 meses que conduciría a la toma de posesión de una nueva presidencia en febrero de 2026. A finales de abril, cuatro de los siete miembros del CPT habían propuesto al exministro Fritz Bélizaire como primer ministro interino, pero dicha opción fue rechazada por el

resto de miembros del consejo, provocando la primera crisis de la incipiente institución encargada de pilotar la transición política en el país. Ante la posibilidad de que los mencionados cuatro miembros del consejo pudieran conformar un bloque estable y controlar las decisiones del consejo, a principios de mayo el CPT acordó que la presidencia del consejo sería rotatoria (cada cinco meses) y que las votaciones para los nombramientos y decisiones relevantes deberían contar con una mayoría de cinco votos.

En este sentido, a finales de mayo **fue nombrado como primer ministro interino Gary Conille**, ex primer ministro entre 2010 y 2011 y funcionario de la ONU que recientemente había ejercido como director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. **A mediados de junio, Conille y el CPT presentaron un nuevo gabinete de gobierno**, que reemplaza todos los miembros del ejecutivo anterior, incluye funcionarios de organismos internacionales y en el que el propio Conille es ministro del Interior. El nuevo Gobierno anunció el nombramiento de Normil Rameau –que ya había ejercido en cargo entre 2019 y 2020– como director de la Policía en sustitución de Frantz Elbé, que había recibido críticas por su respuesta a las acciones de las bandas armadas.



Fuente: FDFA/POOL/Sebastien Crettaz

RUSIA – UCRANIA

Resultados ambivalentes de la cumbre suiza sobre la paz en Ucrania

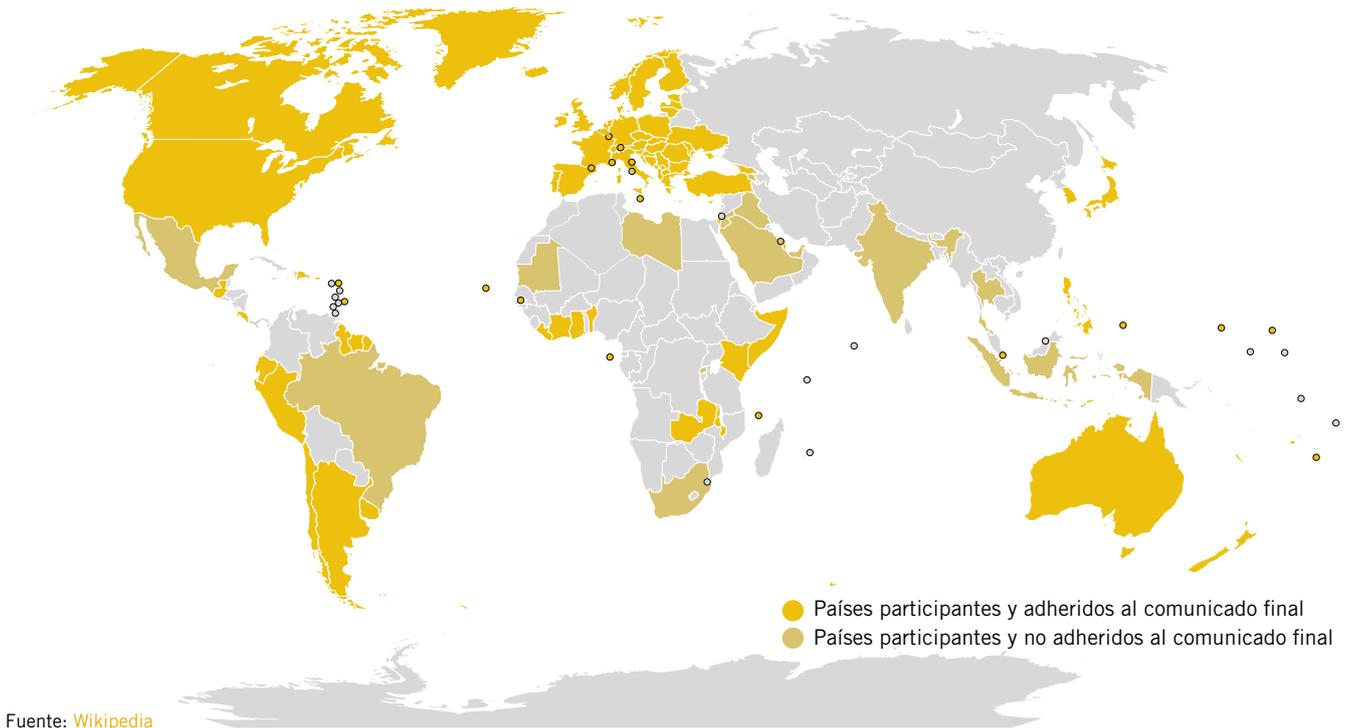
La llamada Cumbre sobre la Paz en Ucrania, co-organizada por Suiza y Ucrania el 15-16 de agosto en Bürgenstock, con participación de 92 países y ocho organizaciones internacionales, finalizó con resultados ambivalentes, éxitos parciales y dificultades. La cumbre, **según Suiza**, tenía por objetivo general “inspirar un futuro proceso de paz” y, más concretamente, facilitar un espacio para el diálogo sobre vías para la paz en Ucrania, así como “definir conjuntamente una hoja de ruta sobre cómo involucrar a las dos partes en un futuro proceso de paz”. Al mismo tiempo, la conferencia pivotó sobre la llamada Fórmula de Paz de Ucrania y la visión de Kíev sobre los términos para una solución al conflicto. 84 países y organismos firmaron el comunicado final (90 a finales de junio, tras tres retiradas de apoyo y nueve respaldos nuevos), sin adhesión de países como Arabia Saudita, EAU, Qatar, Sudáfrica, Colombia, México o Brasil, entre otros, y la ausencia de China y Rusia en la cumbre. El texto señala los principios de integridad territorial y soberanía de los Estados en el marco de la Carta de Naciones Unidas como base para alcanzar una “paz global, justa y duradera para Ucrania”. Asimismo, insta a medidas en el ámbito de protección de instalaciones nucleares, seguridad alimentaria y prisioneros de guerra.

Éxitos limitados de la cumbre

Entre los resultados parcialmente exitosos, la cumbre permitió situar en el foco político y mediático el ámbito del diálogo y las negociaciones, una dimensión a la que se ha dedicado escasa atención desde la ruptura de las negociaciones entre Rusia y Ucrania en abril de 2022. Desde entonces, los esfuerzos internacionales han estado mayormente centrados en la dimensión militar, en contraste con limitados esfuerzos de apoyo a **la búsqueda de salidas negociadas**. En tanto que cualquier vía de finalización negociada a los conflictos armados tiende a ser compleja y requiere de larga preparación y generación de bases para ello, la conferencia al alto

nivel diplomático acertó al resituar el ámbito del diálogo como foco requerido de atención y de esfuerzos. En ese sentido, destaca la amplia participación estatal, con 92 países (55 representados por jefes de Estado/Gobierno, 32 a nivel ministerial y cinco con enviados), con presencia de delegaciones del llamado norte y sur global, aun con las marcadas ausencias ya mencionadas. **Algunos análisis** señalaron el potencial de la cumbre de allanar y contribuir a preparar el camino hacia una eventual futura vía de salida negociada

Mapa 1. Países participantes en la cumbre sobre Ucrania en Suiza



Otro elemento clave de la cumbre, y que Suiza destacó como exitoso, es que por primera vez al más alto nivel político –y en un foro con delegaciones de 92 países– se discutió sobre cómo y cuándo involucrar a Rusia en el proceso. La propia Suiza había explicitado su posición previa a la cumbre de que alcanzar una solución de paz duradera requiere de la participación de Ucrania y Rusia. En conferencias anteriores –convocadas a nivel de asesores de seguridad y cargos medios de ministerios de entre 15 y 65 países, en Dinamarca, Arabia Saudita y Malta– ya habían emergido voces del sur global que llamaban a la necesidad de involucrar a Rusia. En Suiza se dio el paso de incorporar esta discusión como uno de los objetivos oficiales de la cumbre. El comunicado recoge también esa necesidad de involucrar a todas las partes para avanzar hacia la paz, si bien en el marco de los términos de solución marcados por Ucrania (integridad territorial, soberanía nacional), rechazados frontalmente por Rusia. Con ello, está por ver cómo se construirán las bases para el diálogo entre Rusia y Ucrania.

La ausencia de Rusia en la cumbre había sido señalada como una limitación de partida. Suiza había descartado invitar formalmente a Rusia alegando que Moscú había ya mostrado su rechazo a la conferencia. Algunos análisis plantearon que su ausencia no invalidaba la cumbre, y que si bien Rusia habrá de ser parte en una solución negociada, **por ahora resultaba inviable el diálogo directo** entre Rusia y Ucrania, o que la posición actual rusa de intransigencia **habría hecho improductivo** el discutir las perspectivas de paz con Rusia en la cumbre. En contraste, según Türkiye –país participante en la cumbre y facilitador en el intento fallido de negociaciones de 2022 y en ámbitos como la exportación de cereales–, la cumbre habría estado **más orientada a resultados** con la

Tabla 2. Puntos principales del “Comunicado conjunto sobre un marco de paz” (Suiza, 16 de junio de 2024)

| |
|---|
| Compromiso con la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania, en sus fronteras reconocidas internacionalmente, y con la resolución pacífica de las disputas |
| Seguridad de las instalaciones nucleares; exigencia de control pleno por Ucrania de las instalaciones nucleares, incluyendo Zaporíyia; abstención de amenaza o uso de armas nucleares |
| Exigencia de seguridad para las rutas marítimas comerciales y el suministro de productos agrícolas a terceros países. |
| Liberación por intercambio de todos los prisioneros de guerra y retorno de todos los menores y civiles de Ucrania deportados, desplazados y detenidos ilegalmente |
| Compromiso de adopción de pasos concretos en esas áreas con la participación de todas las partes |

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del comunicado final de la Cumbre sobre la Paz en Ucrania

participación de Rusia. En todo caso, la ausencia de Rusia –y la oposición de Moscú al marco de solución defendido por Kíev y recogido en el comunicado– llevó a diversos países a no firmar el texto final, poniéndose de manifiesto las limitaciones de la cumbre y las dificultades vinculadas las divisiones geoestratégicas proyectadas en el conflicto y los desacuerdos sobre las visiones para una solución.

Por otra parte, la cumbre abordó de manera específica tres de los 10 puntos de la llamada **Fórmula de Paz de Ucrania** de 2022: seguridad nuclear, seguridad alimentaria y liberación de prisioneros de guerra, personas detenidas y menores deportados. Son tres temas escogidos por generar menos controversia entre la heterogeneidad de países asistentes. De hecho, han sido ámbitos donde en el pasado se han logrado avances prácticos o mantenido

interlocución (ej. extinto acuerdo del grano, intercambios de presos/as, diálogo indirecto de las partes con el OIEA), y en los que también se han involucrado en el pasado países no firmantes (ej. Arabia Saudita y EAU involucradas en intercambios de prisioneros) o que los han apoyado por otras vías (ej. propuesta de paz de la delegación africana de 2023, propuesta chino-brasileña de mayo de 2024). En el marco de la cumbre, estos tres temas se abordaron en grupos de trabajo, que seguirán tras la cumbre, también a nivel técnico.

Limitaciones y obstáculos

En el contexto de la cumbre se puso de manifiesto las limitaciones y obstáculos. Por una parte, en paralelo a la conferencia de alto nivel en Suiza, la realidad práctica en Ucrania era de continuación del conflicto armado de alta intensidad, con una nueva **ofensiva rusa** desde mayo y con luz verde de EEUU, Alemania y la OTAN a Ucrania para atacar con armamento occidental en territorio de Rusia (con el argumento de “la defensa de Járkov”), entre otros desarrollos recientes y, en conjunto, sin perspectivas de finalización del conflicto a corto plazo. Continuaban, a su vez, los graves impactos en seguridad humana, incluyendo 14,6 millones de personas en situación de necesidad de asistencia humanitaria, según OCHA.

Asimismo, Rusia y Ucrania siguieron manteniendo posiciones antagónicas respecto a una posible solución en lo que respecta a las cuestiones de territorio y soberanía. En ese sentido, previo a la cumbre el presidente ruso, Vladimir Putin, **expuso sus condiciones** para un alto el fuego y para el inicio de negociaciones que, según Rusia, habrían de conducir a un fin definitivo del conflicto y no un congelamiento del mismo. Sus condiciones incluían compromiso e inicio de retirada completa de las fuerzas ucranianas de todo el territorio de las cuatro regiones anexionadas por Rusia –aun si no están totalmente bajo su control militar– y abandono de los planes de Ucrania de adhesión a la OTAN. La posición rusa exige también el reconocimiento de esas cuatro regiones y de Crimea como parte de la Federación de Rusia, a estipularse a futuro en forma de acuerdos internacionales, así como la anulación de las sanciones internacionales. Se trata de una posición rechazada frontalmente por Ucrania, que defiende tanto la integridad territorial del país en base a las fronteras de su independencia en 1991, como la soberanía para optar a su entrada en la OTAN. En las **negociaciones político-militares** con facilitación de Türkiye entre el inicio de la invasión y abril de 2022, Rusia y Ucrania habían alcanzado cierto grado de aproximación en torno a un posible esquema de acuerdo de neutralidad permanente respecto a la OTAN, garantías de seguridad y postergación de la cuestión de Crimea, a ser resuelta por vías diplomáticas en 15 años. Desde la anexión de Rusia por la vía militar en septiembre de 2022 de las cuatro regiones ucranianas, la posición de Moscú pasó a

Rusia y Ucrania siguieron manteniendo posiciones antagónicas respecto a una posible solución en lo que respecta a las cuestiones de territorio y soberanía



Fuente: Kseniia Nevenchenko/UNDP Ukraine

ser más explícitamente maximalista en lo territorial. Por su parte, Ucrania se alejó del llamado Comunicado de Estambul y dejó fijada su posición en su llamada Fórmula de Paz de noviembre de 2022, que ha ido promoviendo internacionalmente. En gran parte ese plan ha orientado la cumbre de Suiza, aunque el comunicado de esta señalaba apoyarse también en otras propuestas de paz en línea con el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas.

Por otra parte, en la cumbre se evidenciaron también las divisiones y aproximaciones heterogéneas al conflicto entre los países euroatlánticos y países BRICS y del sur global. China no participó en la cumbre (había participado en la de Arabia Saudita en agosto de 2023, pero no en las de Dinamarca y Malta). Brasil participó solo en calidad de observador y no firmó el comunicado. Países como Arabia Saudita, EAU, Qatar, India, Sudáfrica, Indonesia, Tailandia, Colombia, México, entre otros, participaron en la cumbre, pero **no firmaron el comunicado final**, por la ausencia de Rusia, el contexto global de divisiones geoestratégicas y posiciones estatales específicas. Por otra parte, Ucrania había denunciado previamente **presiones de Rusia** a países para no participar en la cumbre.

Por otra parte, otra limitación fue la relativa a la falta de participación de actores de la sociedad civil en la cumbre. Junto a los Estados, participaron organismos intergubernamentales y dos religiosos. La cumbre fue concebida como un espacio al más alto nivel político. En todo caso, la propia Suiza señaló que debe involucrarse a actores del sector privado y sociedad civil conforme el proceso de paz avance. La participación en diferentes fases y niveles de actores de la sociedad civil afectada por el conflicto, incluyendo organizaciones de mujeres, podría contribuir a la apropiación de escenarios futuros negociados, así como fortalecer la dimensión de seguridad humana y de género en las discusiones. A su vez, actores de la sociedad civil internacional involucrados en apoyo al diálogo inclusivo pueden aportar **perspectivas adicionales** sobre ventanas de oportunidad y retos, como han recogido en diversos documentos.

Otras propuestas de paz y siguientes pasos

Previo a la cumbre, en mayo **China y Brasil anunciaron una propuesta conjunta** para impulsar las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, en la que llamaron a las partes a desescalar el conflicto, a no expandir el campo de batalla y a abstenerse de provocaciones. La propuesta señala el diálogo y la negociación como únicas vías de solución a la crisis, insta a todas las partes a crear las condiciones para la reanudación del diálogo directo y muestra apoyo a la celebración de una conferencia internacional de paz en el momento oportuno, que sea reconocida por ambas partes y en la que todas las partes participen en igualdad y con “discusión justa de todos los planes de paz”. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, **criticó abiertamente a China** y Brasil, en contraste con mensajes anteriores hacia China más moderados.

En el documento de **posición de China** de febrero de 2023 para la resolución del conflicto había algunas referencias a principios que, aunque interpretadas en algunos análisis como vagas, abordaban preocupaciones tanto de Ucrania como de Rusia. En la nueva propuesta de Brasil y China de 2024 no hay referencias a principios que puedan inspirar el abordaje de los nudos principales del conflicto (territorio, soberanía), a excepción de la referencia a que todos los planes de paz deben ser igualmente discutidos (punto 1) y que debe evitarse la división del mundo en grupos políticos o económicos

Previo a la cumbre en Suiza, Brasil y China presentaron una propuesta conjunta que llama a las partes a desescalar el conflicto

aislados (punto 6). Algunos análisis han señalado que China mantiene **silencio sobre la cuestión de la integridad territorial** de Ucrania. La nueva propuesta de China y Brasil podría suponer un mayor acercamiento de la posición de China y Brasil a Rusia, un intento de contrarrestar la cumbre de Suiza o, en otra dirección, un empuje al diálogo sin precondiciones de ninguna de las partes, o incluso una combinación de todos ellos.

Las limitaciones de la cumbre de Suiza y de otras iniciativas y propuestas hasta la fecha ponen de manifiesto las enormes dificultades para la búsqueda de una vía de resolución negociada a la situación de invasión y guerra interestatal en Ucrania. No obstante, tienen el acierto de poner sobre el foco la necesidad de esfuerzos de diálogo. Está por ver qué pasos y que formatos complementarios o en competición entre ellos, públicos y no públicos, se tomarán en próximos meses en la dimensión del diálogo. Ucrania trabaja ya en la preparación de una segunda próxima cumbre, cuyos términos –e involucramiento en relación a Rusia– están por definirse. Por el momento, y dadas las dificultades y obstáculos y el predominio del foco militarista, se requiere de muchos más esfuerzos para promover vías de salida negociada que pongan fin a la invasión y la guerra y que se comprometan a largo plazo con el abordaje de las consecuencias de la guerra en ámbitos como seguridad humana, de género y medioambiental y justicia transicional.

ÁFRICA

ÁFRICA SUBSAHARIANA: La región vuelve a ser la más afectada por el desplazamiento forzado interno en el mundo en 2023

ÁFRICA OCCIDENTAL: La ruta migratoria hacia el Estado español vía las Islas Canarias se convierte en la más mortífera del mundo en 2024

CHAD: Mahamat Déby gana las elecciones presidenciales en medio de un clima de fraude y de represión contra la oposición poniendo fin a la transición

ETIOPÍA – SOMALIA: Se inician contactos entre ambos países con la facilitación de Türkiye y Qatar para resolver la crisis provocada por el memorando entre Etiopía y Somalilandia

KENYA: Al menos 30 personas mueren en protestas antigubernamentales sin precedentes contra los incrementos de impuestos

LIBIA: La renuncia del enviado especial de la ONU evidencia riesgos de cronificación del bloqueo político

MALÍ: La Junta Militar anuncia la suspensión de las elecciones y de todas las actividades políticas en el país

NAMIBIA Y SIERRA LEONA: Avances en los derechos de la infancia y la comunidad LGTBQ+

SAHEL OCCIDENTAL: Prosigue la reconfiguración de las alianzas de seguridad y defensa en la región

SUDÁN: Más de la mitad de la población padece inseguridad alimentaria aguda por la guerra, el peor nivel jamás registrado en el país

SUDÁN DEL SUR: Persisten las críticas al Ejecutivo por el incumplimiento de las condiciones para unas elecciones presidenciales justas y democráticas

ÁFRICA SUBSAHARIANA

La región vuelve a ser la más afectada por el desplazamiento forzado interno en el mundo en 2023

En el continente africano se observa un crecimiento en el número de desplazamientos forzados internos con respecto al año anterior. Según datos del IMDC, en 2023 África subsahariana volvió a ser la región más afectada por el desplazamiento interno en el mundo, registrando un total de 34,8 millones de personas, que representa el 46% del total mundial. Si se analiza la tendencia a largo plazo, el número total de personas desplazadas internas en la región casi se ha triplicado desde 2013. Solo durante el año 2023 se registraron 19,5 millones de nuevos desplazamientos internos, frente a los 16,5 millones reportados en 2022, representando el 42% del total general. La guerra iniciada en abril de 2023 en Sudán provocó una de las mayores crisis humanitarias y de desplazamiento del mundo, con más de 6 millones de personas que se convirtieron en nuevas desplazadas dentro del país y otras 1,2 millones refugiadas en países vecinos. De este modo, Sudán se ha convertido en el país africano con mayor número de desplazamiento interno provocado por la violencia (9 millones de personas), seguido de RDC (6,7 millones), Somalia (3,8), Nigeria (3,3) y Etiopía (2,8).

El informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) *Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2023*, contabilizó en total 117,3 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo en 2023 “como resultado de persecución, conflictos, violencia, violaciones

de derechos humanos o acontecimientos que perturben gravemente el orden público”. De estas personas 43,4 millones son refugiadas y 68,3 millones desplazadas internas. Estos datos significan que en 2023 se produjo un aumento del 8% de personas desplazadas (8,8 millones) en comparación con 2022 y que se consolida la tendencia de aumentos interanuales observada durante los últimos 12 años. Una de cada 69 personas, o el 1,5% de la población mundial, se encuentra actualmente desplazada forzosamente, casi el doble que hace una década.

ÁFRICA OCCIDENTAL

La ruta migratoria hacia el Estado español vía las Islas Canarias se convierte en la más mortífera del mundo en 2024

La violencia, la represión, los impactos del cambio climático o la falta de oportunidades siguen forzando a la población a desplazarse o migrar en busca de seguridad y oportunidades de vida. En los primeros cinco meses de 2024, según el *informe de la ONG Caminando Fronteras*, más de 5.000 personas han perdido la vida intentando llegar al Estado español por mar, el 95% de ellas en cruces del Océano Atlántico desde África occidental y noroccidental hasta las Islas Canarias, convirtiendo esta ruta como *la más mortífera del mundo*. La ONG denuncia que estas cifras representan un aumento de las víctimas mortales de casi un 700% en los cinco primeros meses de 2024 respecto al mismo periodo de 2023. Durante ese periodo, al menos 47 pateras desaparecieron y un promedio de 33 personas murieron cada día. El informe también señala que las llegadas a Canarias llevan años

aumentando, pero se observa un cambio en el origen. 7.270 personas llegaron a Canarias en enero de 2024, lo que representa un aumento del 1.184% en comparación con las llegadas al archipiélago en el mismo mes de 2023. Del total de llegadas en enero de 2024, un 83% salieron de Mauritania, lo que representa un cambio importante con respecto a años anteriores, cuando la mayoría procedía de Senegal.

CHAD

Mahamat Déby gana las elecciones presidenciales en medio de un clima de fraude y de represión contra la oposición poniendo fin a la transición

El presidente de la Junta Militar de Chad, Mahamat Déby, consiguió la victoria en las elecciones presidenciales del 5 y el 6 de mayo, **consolidando su control sobre el país**. La autoridad electoral declaró el 9 de mayo ganador a Déby con el 61% de los votos, lo que marcó el final del período de transición. **Sus principales rivales, entre ellos el ex primer ministro Padacké y el actual primer ministro Succès Masra, inicialmente impugnaron los resultados** y presentaron apelaciones infructuosas ante el Tribunal Constitucional, que el 16 de mayo certificó los resultados. Déby el 17 de mayo rechazó los llamados a un gobierno de unidad nacional, y Succès Masra renunció como primer ministro el 22 de mayo. Déby tomó posesión y nombró a **Allamaye Halina como primer ministro**; quien anunció un nuevo gobierno formado por ministros partidarios de Déby y ningún miembro de la oposición.

La comunidad internacional celebró la consecución del proceso electoral **en medio de informes de irregularidades y represión**. Mientras el Ejército desplegaba una importante presencia alrededor de los colegios electorales y en las principales ciudades, el 6 de mayo las fuerzas de seguridad detuvieron a 79 partidarios de Masra por presunto fraude. Surgieron informes de irregularidades: algunos colegios electorales no estaban equipados adecuadamente o abrieron tarde, mientras que los observadores de la oposición informaron que los menores votaban y partidarios del régimen confiscaban las urnas. Mientras tanto, los observadores electorales independientes enfrentaron restricciones. **La sociedad civil el 5 de mayo y la UE el 7 de mayo condenaron la denegación de acceso a 2.900 observadores**. Hubo informaciones sobre agresiones a un activista de la oposición en la ciudad de Koumra, mientras que el mismo día un periodista de la oposición informó sobre intimidación por parte de hombres armados en la capital, N'Djamena. **Human Rights Watch** el 13 de mayo expresó su preocupación por la represión política y la consolidación del poder por parte del Gobierno. Sin embargo, actores internacionales aplaudieron en gran medida la elección de Déby. El organismo regional Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC) felicitó a Déby al igual que el presidente francés, Emmanuel Macron, así como otros países de la región. EEUU reconoció un hito en la transición, pero destacó

“deficiencias preocupantes”. En medio de crecientes vínculos con Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin también envió un mensaje de felicitación.

Las divisiones internas del partido oficialista aumentaron a medida que se intensificó la represión contra las figuras de la oposición. A pesar de la victoria electoral, estallaron tensiones dentro del gobernante Movimiento Patriótico de Salvación (MPS) en medio de tensiones en torno a la competencia por puestos gubernamentales. **Mientras tanto, la preocupación por la represión nacional e internacional de la oposición continuó** después de que el 30 de mayo la activista radicada en Francia Charfadine Galmaye Salimi acusara al jefe y adjunto de la Agencia de Seguridad Nacional de conspirar para asesinarla en Francia. El 3 de junio, la policía reprimió violentamente una protesta estudiantil en el noveno distrito de la capital, e hirió al menos a 12 estudiantes.

En paralelo, el Gobierno profundizó las relaciones con Rusia, pero también defendió los vínculos con Occidente. **El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, visitó N'Djamena el 5 de junio**, lo que marcó un paso más en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales tras la visita de Déby en enero a la capital rusa. Lavrov elogió la cooperación bilateral y alentó el apoyo de Chad a Rusia en el conflicto en Ucrania. A pesar de la creciente influencia rusa y la continua retórica antioccidental de algunas figuras del régimen, el Gobierno continuó apoyando a los aliados tradicionales. En este sentido, el 7 de junio, las autoridades prohibieron la marcha pacífica del grupo Movimiento Revolucionario para la Democracia y la Paz contra la presencia francesa, mientras que el primer ministro Halina reafirmó el 13 de junio el compromiso con los aliados occidentales históricos, pero enfatizó el derecho del país a colaborar con nuevos socios de seguridad durante la presentación del programa del gobierno a la Asamblea Nacional. No obstante, **el Gobierno solicitó en abril la retirada de las tropas estadounidenses**. Una carta del Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, general Idriss Amine Ahmed, del 4 de abril confirmó rumores anteriores de que el Gobierno había pedido a las tropas estadounidenses que se retiraran de la base militar Adji Kosseï en el aeropuerto de N'Djamena. Ahmed citó la falta de base legal para la presencia estadounidense. El 25 de abril, el ejército estadounidense dijo que Washington repositionaría parte de sus tropas, mientras continuaban las conversaciones.

ETIOPÍA – SOMALIA

Se inician contactos entre ambos países con la facilitación de Türkiye y Qatar para resolver la crisis provocada por el memorando entre Etiopía y Somalilandia

Etiopía y Somalia iniciaron contactos el 1 de julio con **la facilitación de Türkiye** para reconducir la grave crisis diplomática entre ambos países desencadenada por la firma de un memorando de entendimiento entre Etiopía y

Somalilandia el 1 de enero de 2024 que también provocó una grave crisis entre Etiopía, Somalilandia y Somalia. Este acuerdo daría a Etiopía, que no tiene acceso al mar, la oportunidad de obtener una base naval permanente y servicio marítimo comercial en el Golfo de Adén a través de un acuerdo de arrendamiento por una extensión de 20 kilómetros de costa durante un periodo de cincuenta años, según detallaron los gobiernos etíope y somalilandés. A cambio, según el presidente de Somalilandia, Muse Bihi Abdi, Etiopía reconocería internacionalmente a su región como un país independiente.

Estas negociaciones son el último intento de reparar las relaciones diplomáticas, agravadas desde el memorando de enero. **El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, recibió a su homólogo etíope, Taye Atske Selassie, y a somalí, Ahmed Moallim Fiqi, en Ankara.** El Ministerio de Exteriores de Türkiye señaló que los tres habían firmado una declaración conjunta tras conversaciones francas, cordiales y con visión de futuro sobre sus diferencias. En estas conversaciones acordaron celebrar otra ronda de contactos en Ankara el 2 de septiembre, según el comunicado. Un portavoz de la autoproclamada República de Somalilandia, que no está reconocida internacionalmente, pero cuenta con Constitución (2001), moneda y gobierno propios, además de mayor estabilidad política que Somalia desde que declaró su independencia en 1991, dijo que Somalilandia no estaba involucrada en las conversaciones.

No obstante, a pesar de los intentos turcos de mediar entre Mogadiscio y Addis Abeba y de que también el **emir qatarí Tamim bin Hamad Al-Thani hablara el 12 de junio con el presidente somalí Mohamud y el primer ministro etíope Abiy Ahmed** en llamadas separadas, se lograron pocos avances hacia el acercamiento. **Creció la preocupación** sobre el impacto de las tensiones en la seguridad cuando funcionarios del Gobierno somalí afirmaron a finales de mayo y principios de junio que las fuerzas etíopes no formarían parte del complejo de seguridad posterior a la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS) a menos que Addis Abeba se retractara del acuerdo con Somalilandia. El embajador del Gobierno somalí ante la ONU acusó el 24 de junio a las tropas etíopes de “incursión” transfronteriza en la región de Hiraan.

KENYA

Al menos 30 personas mueren en protestas antigubernamentales sin precedentes contra los incrementos de impuestos

El país se ha visto inmerso en una escalada de los **disturbios que causaron la muerte de al menos 30 personas y centenares de heridos** como consecuencia de represión por parte de los cuerpos de seguridad ante las movilizaciones masivas contra los aumentos de impuestos propuestos por el Gobierno, que ha acabado retirando la propuesta de ley. El 18 de junio se desencadenaron

movilizaciones y protestas espontáneas en Nairobi, **impulsadas en gran medida por jóvenes de clase media que se organizaban en las redes sociales**, según el ICG, contra el controvertido proyecto de ley de finanzas, el Finance Bill 2024, enormemente impopular, que contenía nuevos impuestos que muchos temen que aumentarán el ya levado costo de la vida y provocarán pérdidas de empleo. La Policía arrestó a decenas de personas y utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua, hiriendo a varios manifestantes. El comité de finanzas parlamentario anunció ese mismo día que eliminaría ciertas cláusulas, aunque se mantuvieron muchos impuestos controvertidos, incluidos los relativos a los tratamientos contra el cáncer y los productos sanitarios femeninos. Cuando las protestas del 20 de junio se reanudaron y se extendieron a pueblos y ciudades de todo el país, los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron al menos 200 heridos. En Nairobi, la policía presuntamente mató a tiros a un manifestante, mientras que otro murió al ser alcanzado por un bote de gas lacrimógeno.

El 25 de junio se produjo una escalada de la situación cuando los manifestantes irrumpieron en el Parlamento después de que los legisladores aprobaran el proyecto de ley, incendiando partes del edificio. Las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, se volvieron violentas el 25 de junio cuando los legisladores aprobaron aumentos de impuestos profundamente impopulares, tras la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Después del anuncio de la votación, una multitud irrumpió en el complejo del Parlamento y se produjo un incendio en enfrentamientos sin precedentes en la historia del país desde su independencia de Gran Bretaña en 1963. Fuentes de una asociación de personal médico afirmaron que al menos 23 personas murieron cuando la Policía supuestamente disparó munición real para dispersar a los manifestantes, **cifra que Human Rights Watch elevó a al menos 30 víctimas mortales.** El presidente William Ruto dijo al día siguiente que no firmaría el proyecto de ley y que entablaría un diálogo con los jóvenes, aunque señaló que **el país tendrá que endeudarse más** para mantener al gobierno en funcionamiento tras el rechazo del proyecto de ley de finanzas. Las protestas persistieron el 27 de junio, aunque en menor escala, y algunos miembros de las fuerzas de defensa se desplegaron en Nairobi para garantizar la calma.

Ruto estimó que abandonar el proyecto de ley había hecho retroceder al país dos años, mientras explicaba la **dificultad de no poder recaudar impuestos adicionales mientras se enfrentaba una enorme carga de deuda.** Dijo que esto significaba que Kenya tendría que pedir prestado un billón de chelines (7.600 millones de dólares; 6.100 millones de libras) sólo “para poder dirigir nuestro gobierno”. Se trata de un aumento del 67% respecto a lo previsto. Pero también afirmó que estaba considerando recortes en el gasto en todo el gobierno, incluso en su propia oficina, así como reducir las asignaciones al poder judicial y a los gobiernos de los condados. No obstante, muchos manifestantes se opusieron a los aumentos de impuestos diciendo que el dinero extra se desperdiciaría.

Se suponía que los impuestos adicionales recaudarían unos 350.000 millones de chelines kenianos, mientras que se iban a pedir prestados unos 600.000 millones.

Según el presidente, las medidas fiscales propuestas formaban parte de los esfuerzos por reducir la carga de la deuda de más de 80.000 millones de dólares (63.000 millones de libras esterlinas). Alrededor del 60% de los ingresos recaudados de Kenya se destinan al servicio de la deuda. Además, el rechazo de la ley afectará, según el Gobierno, al empleo de 46.000 profesores de secundaria básica que han tenido contratos temporales, así como a la prestación de asistencia sanitaria. Dijo que el gobierno no podría apoyar a los productores de lácteos, caña de azúcar y café, ni siquiera pagando las deudas de sus fábricas y sociedades cooperativas como se había planeado. Sin embargo, afirmó que estaba considerando las cuestiones planteadas por quienes se oponían al proyecto de ley de finanzas, como recortar el gasto de su oficina y eliminar los presupuestos de la primera dama y de la esposa del vicepresidente.

Cabe destacar, en paralelo, el inicio del establecimiento de la misión policial multinacional dirigida por Nairobi en Haití, después de meses de retrasos (véase el análisis sobre Haití en este informe). En medio de la oposición interna que cuestiona la legalidad del despliegue de 1.000 policías kenianos para liderar la misión respaldada por la ONU en Haití, el jefe de la policía keniana se reunió el 18 de junio con su homólogo haitiano para asegurarle su apoyo, mientras que ese mismo día EEUU autorizó más de 100 millones de dólares para apoyar la misión. Un primer grupo de varios cientos de oficiales kenianos llegó a Haití el 25 de junio.

LIBIA

La renuncia del enviado especial de la ONU evidencia riesgos de cronificación del bloqueo político

La dimisión del enviado especial de la ONU para Libia a mediados de abril dejó en evidencia el persistente impasse político en el país norteafricano y los riesgos del bloqueo en las negociaciones. En su mensaje de renuncia, tras 18 meses en el cargo, el diplomático senegalés Abdoulaye Bathily denunció abiertamente la **falta de voluntad política y buena fe de los dirigentes libios** y alertó sobre sus maniobras y tácticas dilatorias para mantener un *estatus quo* a expensas de los intereses de la población libia. El enviado especial advirtió que en las actuales circunstancias no existían las condiciones para que Naciones Unidas pudiera operar con éxito para facilitar una salida negociada al conflicto en el país. En un contexto de profunda fractura política e institucional –que, entre otras cosas, se materializa en la coexistencia de dos gobiernos rivales, uno reconocido por la ONU con sede en Trípoli y otro en Tobruk (este)– en el último año se había intentado avanzar en acuerdos para permitir la celebración de las postergadas elecciones presidenciales y legislativas, que deberían haber tenido lugar en

diciembre de 2021 y que han sido aplazadas *sine die*. El accidentado trabajo en torno a la modificación de las leyes electorales realizado por el comité conjunto 6+6 – que incluía a representantes de las instancias legislativas alineadas a ambos gobiernos– quedó bloqueado a finales de 2023. Entonces, Bathily intentó promover un nuevo formato de diálogo entre actores institucionales clave de ambos bandos, a excepción del gobierno de Tobruk (no reconocido por la ONU), pero la iniciativa no prosperó. Paralelamente, se celebraron reuniones en marzo en Egipto, bajo los auspicios de la Liga Árabe, entre algunos representantes institucionales libios tras las cuales se anunció un supuesto acuerdo sobre la necesidad de establecer un gobierno unificado para organizar las elecciones. No obstante, con posterioridad no se informó de ninguna medida para concretar este propósito. Asimismo, la organización de una conferencia de reconciliación nacional anunciada para el 28 de abril –que estaba siendo impulsada por la UA, dentro del marco negociador liderado por la ONU– también fue postergada sin informaciones sobre una nueva posible fecha.

Si bien en términos generales la situación de seguridad en Libia se ha mantenido relativamente estable desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego de 2020 –salvo enfrentamientos esporádicos–, análisis advierten sobre la fragilidad del contexto y sobre otras dinámicas y riesgos asociados a la persistencia de la división y el bloqueo político. Entre otros elementos, se alerta sobre la extendida y creciente corrupción que está afianzando a la élite dirigente, el enorme poder e influencia de los grupos armados que operan en el país y la incapacidad de las instituciones de responder a las necesidades de la población –como ilustraron dramáticamente las inundaciones en Derna en septiembre de 2023. Algunos análisis han subrayado que **la proliferación de organismos e instituciones de ambos bandos refuerzan una suerte de esquizofrenia institucional**. A esto se suma la persistencia de otras violencias y vulneraciones a los derechos humanos, como la que viene padeciendo la población migrante y refugiada, y las reiteradas denuncias sobre la violencia sexual en el país.

En su último **informe sobre la violencia sexual en los conflictos armados**, el secretario general de la ONU advertía sobre los mayores riesgos de sufrir violencia sexual que padecen las mujeres y niñas migrantes, especialmente las recluidas en centros de detención, y cómo muchas de ellas son sometidas a abusos sexuales a cambio de alimentos. Traficantes de personas, contrabandistas y actores armados, incluyendo agentes del Estado, se han visto implicados en actos de violencia sexual contra personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. El informe también subraya que la proliferación de armas ilícitas, las divisiones entre actores políticos y los problemas de gobernanza han creado un clima de impunidad en torno a la violencia sexual relacionada con el conflicto y que ésta también ha sido utilizada por agentes estatales y no estatales como una táctica para silenciar a periodistas, personas privadas de libertad y mujeres activas en la vida pública con la intención de

impedir su participación política. La violencia sexual también ha afectado a personas LGTBIQ+, en especial en centros de detención. A este panorama de retos se suma el gran número de actores internacionales que están proyectando y priorizando sus intereses en el escenario libio –incluyendo desde Europa en lo relativo a la gestión del fenómeno migratorio–, dinámica que también dificulta la apuesta por una solución política para la crisis en el país.

Ante este escenario, análisis sugieren que la persona que asuma el cargo de enviado especial de la ONU debería **implicarse de manera más activa y enérgica en la mediación y trascender una aproximación hasta ahora demasiado centrada en las élites** para incorporar a otros actores de la sociedad libia. La nominación no se prevé fácil, teniendo en cuenta que el nombramiento de Bathily (en septiembre de 2022) tardó casi un año, tras la abrupta renuncia de su predecesor en noviembre de 2021, el eslovaco Jan Kubis (sin que se conozcan hasta ahora las razones precisas de su dimisión). Las **tensiones geopolíticas globales pueden ralentizar la designación y afectar la marcha del dossier libio** en general. Por un lado, Rusia culpa a la intervención de la OTAN en 2011 de la actual inestabilidad en Libia y señala continuamente a países occidentales de buscar aprovecharse de las reservas de hidrocarburos del país. Por otro, EEUU y otros países occidentales han expresado su preocupación por los indicios de una creciente presencia rusa en Libia, que se habría incrementado de manera relevante en los últimos meses. En mayo, **varios medios informaron del despliegue de al menos 1.800 efectivos rusos en Libia** en pocas semanas, algunos de los cuales habrían sido transferidos a Níger. La presencia de militares rusos –incluyendo fuerzas especiales y tropas regulares, algunos procedentes de Ucrania– se suma a la de miembros del Grupo Wagner y se habría intensificado tras los contactos entre Moscú y el líder militar del este, Khalifa Haftar. Desde principios de año investigaciones han detectado presencia militar y de equipamiento ruso en al menos 10 localidades del este de Libia.

MALÍ

La Junta Militar anuncia la suspensión de las elecciones y de todas las actividades políticas en el país

En medio del deterioro de la situación de seguridad en el país y del reinicio de la guerra en el norte, el 10 de abril, la Junta Militar de Malí anunció una serie de decisiones que pusieron de manifiesto el creciente giro autoritario del Ejecutivo, generando un aumento de las tensiones en el país. Por un lado, la Junta anunció que las elecciones presidenciales se aplazarían hasta que el país recuperara la estabilidad política. Por otro, **emitió un decreto suspendiendo todas las actividades políticas de los partidos y de las asociaciones con orientación política hasta nuevo aviso**, supuestamente por razones de seguridad y mantenimiento del orden público. Este anuncio se interpretó como un movimiento de la Junta debido a la creciente presión de decenas de partidos

políticos que habían exigido un rápido retorno al gobierno democrático en Malí. El decreto también ordena a todos los medios de comunicación locales que dejen de retransmitir las actividades de los partidos y asociaciones políticas. En respuesta, numerosos partidos y grupos de la sociedad civil presentaron una apelación ante la Corte Suprema y anunciaron su boicot a participar en el diálogo nacional convocado.

En este creciente clima de tensión y represión contra la oposición se celebró la primera fase del diálogo nacional maliense entre el 13 y 15 de abril, sin que este espacio contara con la participación ni de los grupos armados separatistas del Marco Estratégico Permanente (CSP), ni los grupos yihadistas y otros actores políticos clave que boicotearon el diálogo, denunciando que el mismo solo sería utilizado por los militares para buscar legitimidad y mantenerse en el poder. La etapa final del diálogo nacional tuvo lugar en la capital, Bamako, del 6 al 10 de mayo, y en las conclusiones del mismo, las **recomendaciones** recogieron la ampliación del período de transición de dos a cinco años, así como permitir que el coronel Assimi Goïta, actual presidente de transición y jefe de la Junta Militar, se postule para la presidencia cuando finalmente se celebren elecciones. Diferentes grupos opositores calificaron el diálogo de “trampa política grotesca”. Semanas después, políticos malienses exiliados proclamaron en una declaración firmada en Ginebra la conformación de un **gobierno de transición en el exilio**, nombrando al magistrado exiliado Mohamed Cherif Koné primer ministro y ministro de Defensa. El gesto, según analistas locales, tiene más un carácter simbólico, en un intento de lograr cobertura de los medios.

En otro ámbito, la Corte Penal Internacional (CPI) continuó avanzando en los casos abiertos por la guerra de Malí. El 21 de junio, el tribunal emitió una **orden de arresto contra Iyad Ag Ghaly**, militante islamista tuareg y líder del grupo yihadista Ansar Dine, vinculado a Al Qaeda, acusado de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad entre 2012 y 2013. También, el 26 de junio, **la CPI condenó a Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud**, también miembro de Ansar Dine, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por hechos acontecidos en Tombuctú entre 2012 y 2013.

NAMIBIA Y SIERRA LEONA

Avances en los derechos de la infancia y la comunidad LGTBIQ+

Si en el primer trimestre de 2024 varios países africanos habían dado pasos que incidían en la **vulneración de los derechos de las mujeres (Gambia) y población LGTBIQ+ (Ghana y Uganda)**, en el segundo trimestre se registraron avances en la protección de estos derechos en otros dos países: Namibia y Sierra Leona. Por un lado, en **Namibia, el Tribunal Superior declaró inconstitucionales dos leyes de la era colonial que criminalizaban los actos sexuales entre personas del mismo sexo**, en lo que representó una

victoria histórica para la comunidad LGTBQ+ en África. El caso fue presentado por el activista namibio Friedel Dausab con el apoyo de la organización no gubernamental Human Dignity Trust, con sede en el Reino Unido. Estas leyes sobre “sodomía” y “delitos sexuales antinaturales”, heredadas por el país tras su independencia de Sudáfrica en 1990 y que se remontan al dominio colonial, perpetuaron la discriminación contra la comunidad LGTBQ+ en el país.

Por otro lado el Parlamento de Sierra Leona aprobó un proyecto de ley histórico que penaliza el matrimonio infantil con penas de cárcel de hasta 15 años o multas considerables para los perpetradores. Según un informe de UNICEF de 2019, el país alberga a 800.000 niñas casadas, la mitad de las cuales contrajeron matrimonio antes de los 15 años. Si bien el proyecto de ley aún debe ser promulgado por el presidente Julius Maada Bio, la iniciativa representa una importante victoria para las personas activistas y los derechos de las niñas en una región que tiene la mayor prevalencia de esta práctica en el mundo.

SAHEL OCCIDENTAL

Prosigue la reconfiguración de las alianzas de seguridad y defensa en la región

Tras el anuncio de Burkina Faso, Malí y Níger de abandonar la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) a finales de enero de 2024 en respuesta a las presiones y sanciones del organismo regional a las juntas militares de los tres países, el 17 de mayo los respectivos Ministros de Relaciones Exteriores se reunieron en Niamey, capital de Níger para finalizar el borrador de la recién creada Confederación de la Alianza de Estados del Sahel (AES), que involucra a los tres Estados. Este nuevo organismo regional tiene como objetivo principal el combate al terrorismo, el crimen organizado, la defensa colectiva y el apoyo mutuo entre las partes firmantes, según expresó el presidente interino de Malí, el coronel Assimi Goita.

El anuncio de la creación del AES se remonta a septiembre de 2023, cuando la CEDEAO amenazó a la Junta Militar de Níger con enviar una fuerza militar para restaurar el gobierno democráticamente elegido del derrocado Mohamed Bazoum. En ese momento, Malí y Burkina Faso –ambos regidos también por juntas militares– se comprometieron a acudir en defensa de Níger en caso de que fuera atacado por las fuerzas regionales. Tras abandonar la CEDEAO, los tres países también hicieron lo propio con la Alianza del G5 para el Sahel, que también incluía a Mauritania y Chad y había sido formada en 2014 para coordinar los esfuerzos de los Estados miembros en la lucha contra la insurgencia yihadista que afecta a la región.

De forma paralela, las juntas militares también han ido modificando sus alianzas internacionales, rompiendo relaciones con Francia –que ha abandonado la región–, y

también con otros actores como la UE, ONU o EEUU, que se han ido retirando de manera progresiva de la zona a medida que se iban consolidando los gobiernos golpistas en Malí (mayo 2021), Burkina Faso (enero 2022) y, finalmente, en Níger (julio 2023). En este sentido, entre los últimos acontecimientos más destacados, el 27 de mayo la UE anunció el cierre de su Misión de Asociación Militar en Níger (EUMPM) debido a la ruptura de las relaciones con la actual Junta Militar nigerina. Establecida en 2022, la EUMPM estaba compuesta por entre 50 y 100 tropas europeas que ayudaban con logística e infraestructura. Alemania, sin embargo, anunció el 29 de mayo un acuerdo temporal para mantener a sus tropas en la base de transporte aéreo en las afueras de Niamey mientras negocia un nuevo acuerdo. Por otro lado, en mayo la Junta Militar nigerina y el Gobierno de EEUU acordaron la retirada de las tropas estadounidenses en el país (alrededor de 1.000 militares estadounidenses) a mediados de septiembre. El acuerdo proporciona un período de cuatro meses para la retirada de tropas y su equipo, incluidos los drones MQ-9 Reaper. Asimismo, las tensiones entre la Junta Militar y el Gobierno francés se mantuvieron. Las autoridades nigerinas retiraron el permiso de operación para una gran mina de uranio de la compañía francesa Orano. La mina de Imouraren, situada en el norte del país, es uno de los mayores depósitos de uranio del mundo, con reservas estimadas en 200.000 toneladas.

Esta ruptura con los socios tradicionales occidentales ha dado pie a la entrada de Rusia como socio estratégico de seguridad a partir de contratos con la empresa privada de seguridad rusa Wagner, ahora rebautizada como *Africa Corps*. Su entrada se produjo primero en Malí, después en Burkina Faso, y últimamente en Níger, donde la Junta Militar formalizó en abril un acuerdo de colaboración militar con Moscú e inició conversaciones con China para lograr un acuerdo de cooperación en materia de defensa. El acuerdo de seguridad con Rusia incluye el despliegue en el país de tropas posiblemente afiliadas al *Africa Corps*, que el 12 de abril anunció su presencia en Níger a través de las redes sociales. La reconfiguración de Wagner en el *Africa Corps* remite al control que el Ministerio de Defensa ruso ha tomado del brazo de Wagner en África, colocándolo bajo un grupo más grande que incluye otras compañías militares privadas.

SUDÁN

Más de la mitad de la población padece inseguridad alimentaria aguda por la guerra, el peor nivel jamás registrado en el país

Según datos del último informe de Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC) –un grupo de expertos formado por agencias de la ONU, grupos de ayuda y gobiernos que mide crisis alimentarias–, 25,6 millones de personas en Sudán (más de la mitad de la población) padecen inseguridad alimentaria aguda, el peor nivel jamás registrado por el IPC en el país. De ellas, 8,5 millones padecen desnutrición aguda o luchan

por sobrevivir, mientras que 755.000 se encuentran en situación de “catástrofe”, es decir, en condiciones de hambruna. Estas últimas cifras superan incluso a las de Gaza en la actualidad, donde los últimos datos señalan que 495.000 personas se encontraban en la misma situación. El **Instituto Clingendael** denunció que 2,5 millones de personas podrían morir de hambre y enfermedades relacionadas en Sudán hasta septiembre.

En poco más de un año desde el estallido de la guerra en abril de 2023, **más de 15.000 personas civiles han sido asesinadas y más de 8,8 millones de personas se han tenido que desplazar forzosamente por la violencia**, incluidas 6,8 millones de desplazadas internas. En los últimos meses, la intensificación de los combates en el país, principalmente en la región de Darfur, amenazan con agravar el conflicto entre comunidades, generando que la ONU advierta del riesgo creciente de genocidio.

La situación de crisis humanitaria y el recrudecimiento de los combates entre el Ejército y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF) provocó que a mediados de abril tuviese lugar en París una cumbre humanitaria internacional para Sudán y los países vecinos, cuyos anfitriones fueron Francia, Alemania y la Comisión Europea. El objetivo de la cumbre era presionar a los donantes para lograr ayuda humanitaria, así como buscar una mayor coordinación en los esfuerzos de mediación encaminados a lograr un alto el fuego en el país. La intención de los organizadores de la cumbre es situar el conflicto de Sudán como una prioridad en la agenda internacional y movilizar financiación humanitaria. Al terminar la cumbre se comprometieron **2.100 millones de dólares para ayudar a aliviar la crisis humanitaria**, incluyendo 244 millones de dólares de Alemania y más de 377 millones de la Unión Europea. Los fondos permitirán avanzar en el plan de respuesta humanitaria de la ONU para Sudán, de 2.700 millones de dólares, así como en el plan regional de respuesta para personas refugiadas, de 1.400 millones de dólares, ya que ambos carecen de financiación suficiente: sólo han alcanzado un 6% y un 7%, respectivamente.

Por otro lado, la cumbre también reafirmó el compromiso con las iniciativas de paz y Arabia Saudita y Estados Unidos se comprometieron a reiniciar el proceso de Jeddah en un plazo de tres semanas. También el **Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana anunció la convocatoria de una cumbre del espacio conocido como Diálogo Político**, del 10 al 15 de julio en Addis Abeba, Etiopía, donde se reunirán las facciones en guerra de Sudán y otros movimientos políticos para tratar de buscar acuerdos. Tom Perriello, enviado especial de Estados Unidos a Sudán, **advirtió a las partes sudanesas en disputa**, que la comunidad internacional está dispuesta a explorar medidas alternativas si las facciones en guerra de Sudán no demuestran un compromiso genuino con las negociaciones de paz. A nivel interno, varias coaliciones políticas sudanesas siguieron pidiendo el fin de la violencia y la transferencia del poder a los civiles. Entre ellas, la coalición política “Coordinación de Fuerzas Nacionales”

–alineada con el Ejército, que incluye más de 40 partidos políticos, grupos armados, líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil– aprobó el 8 de mayo una carta política que propone un gobierno de transición de tres años con un consejo soberano conjunto militar-civil y un consejo legislativo de transición.

SUDÁN DEL SUR

Persisten las críticas al Ejecutivo por el incumplimiento de las condiciones que garantizan unas elecciones presidenciales justas y democráticas

En el marco de la preparación de las elecciones generales previstas para diciembre de 2024 que pondrían fin al periodo transicional acordado en el Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS) de 2018, se mantuvieron las tensiones entre el Gobierno y los grupos de oposición. La Comisión Conjunta Reconstituida de Seguimiento y Evaluación (RJMEC), organismo encargado de monitorear la implementación del acuerdo de paz, **denunció que no había condiciones de preparación suficiente para las elecciones**. También la Alianza del Movimiento de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) denunció que el Ejecutivo no cumplió con el plazo previsto en el Acuerdo de Paz Revitalizado de 2018 de lograr una **Constitución permanente en septiembre de 2020, siendo inviable lograrlo antes de la celebración de los comicios**. Esto significa que el país podría acudir a elecciones sin disposiciones constitucionales claras que guíen el proceso, tal y como se estipula en el Capítulo 6 del Acuerdo de Paz que prescribe una Constitución para guiar los procesos electorales. Este hecho podría fácilmente representar que el resultado de los comicios no cuente con una base legal y, en el caso de ausencia de mecanismos de disputa electoral, el país podría hundirse en una nueva oleada de inestabilidad y violencia.

También la comunidad internacional reiteró su preocupación por la preparación para las elecciones. António Guterres, secretario general de la ONU, transmitió a principios de abril una carta al Consejo de Seguridad de la ONU en la que describía más de una docena de condiciones previas pendientes y esenciales para la celebración de elecciones justas en el país y enfatizaba la necesidad urgente de asistencia técnica, legal y operativa. Por su parte, Estados Unidos advirtió que no apoyaría el proceso electoral sin una acción gubernamental urgente para implementar el acuerdo de paz de 2018. Entre las **disposiciones clave pendientes destacan** la unificación de las Fuerzas Armadas, la elaboración de una Constitución, la realización de censos de población para determinar el número de distritos electorales o el retorno seguro de personas refugiadas y desplazadas internas.

Paralelamente, el Consejo de Seguridad de la ONU el 29 de abril renovó el mandato de la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) por un año, y un mes después,

el 30 de mayo, renovó las sanciones contra Sudán del Sur, incluido el embargo de armas, la prohibición de viajar y la congelación de activos.

Por otro lado, de forma paralela al proceso de organización de las elecciones presidenciales, a principios de mayo se iniciaron en Kenya las negociaciones de paz que el Gobierno sursudanés mantiene con los grupos armados no signatarios del acuerdo de paz (R-ARCSS) organizados en la Alianza del Movimiento de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA). Estas conversaciones se habían desarrollado hasta la fecha en Roma, bajo mediación de la Comunidad de Sant'Egidio, trasladándose a principios de 2024 a Kenya para ser asumidas por el Gobierno

keniata. La primera ronda de negociaciones comenzó el 9 de mayo en Nairobi y reunió al Gobierno y algunos grupos de SSOMA, incluido el Frente Unido de Sudán del Sur, el Movimiento de Liberación Popular de Sudán Real y el Movimiento/Ejército del Pueblo de Sudán del Sur (SSPM/A). La ronda concluyó con la firma de una **Declaración de Compromisos, conocida como Iniciativa Tumaini (Esperanza)**. Sin embargo, otros miembros de la Alianza, entre ellos el Frente de Salvación Nacional (NAS), liderado por el general Thomas Cirillo, y el Frente Patriótico del Movimiento Democrático Nacional (NDM-PF), liderados por Emmanuel Ajawin, **boicotearon la mediación de Nairobi y no asistieron a la negociación.**

AMÉRICA

COLOMBIA: Se inician las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado Segunda Marquetalia

VENEZUELA – GUYANA: Ambos Gobiernos se reúnen con el presidente de la Corte Internacional de Justicia para discutir la resolución del conflicto por el Esequibo

COLOMBIA

Se inician las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado Segunda Marquetalia

A finales de junio se llevó a cabo la **primera ronda de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla conocida como Segunda Marquetalia**. Este grupo armado surge como una escisión de las FARC encabezada por Iván Márquez, uno de los negociadores de dicho grupo armado en el proceso de paz que desembocó en el acuerdo de 2016. El primer ciclo de conversaciones tuvo lugar en Venezuela y la agenda pactada previamente al inicio formal de este ciclo incluía cinco temas: desescalada del conflicto y alistamiento (declaración) de los territorios de paz; construcción de territorios de paz; víctimas como sujeto social transformador; condiciones para la convivencia pacífica; implementación y verificación. La primera ronda concluyó con un acuerdo para un cese al fuego unilateral por parte de la Segunda Marquetalia, con el compromiso de que sus miembros no estén armados ni uniformados en cabeceras o cascos urbanos ni en vías terrestres o fluviales, así como una entrega de las personas secuestradas y garantías para la población civil. Si bien el alto el fuego tiene un carácter unilateral y en el acuerdo se establece que no se podrá “limitar las competencias constitucionales y legales de la Fuerza Pública”, sí se acordó que entrará en funcionamiento una vez que se haya emitido un decreto presidencial que establece la suspensión de operaciones militares ofensivas en zonas

acordadas. A diferencia de las negociaciones con el ELN y el Estado Mayor Central, el alto el fuego de carácter bilateral no fue uno de los objetivos al inicio de las conversaciones.

Otro punto relevante del acuerdo fue la creación de una subcomisión técnica con el mandato de “georreferenciar los municipios, corregimientos y veredas” en los que hay presencia del grupo armado, con el objetivo de evitar su expansión hacia nuevos territorios. La delegación negociadora gubernamental estuvo liderada por Armando Novoa, y la de la Segunda Marquetalia por Walter Mendoza.



Fuente: Presidencia de la República de Colombia

Además, la delegación gubernamental estaba conformada por el excongresista, ex ministro de Justicia y ex gobernador de Nariño, Parmenio Cuéllar; el coronel retirado Jaime Joaquín Ariza; la antropóloga María Camila Moreno; Gloria Arias Nieto, integrante del movimiento Defendamos la Paz; el subdirector de la Unidad de Restitución de Tierras, Gabriel Bustamante; y el empresario Tulio Gómez. **Algunos de los principales retos para un avance positivo de las negociaciones** tienen que ver con la unidad interna del propio grupo armado con respecto a las negociaciones de paz. Las negociaciones contaron con el acompañamiento de Cuba, Noruega y Venezuela como países garantes, así como de la Conferencia Episcopal y del Representante Especial del secretario general de la ONU, y se pactó la celebración de un segundo ciclo de negociaciones en Cuba durante la segunda semana de agosto.

VENEZUELA – GUYANA

Ambos Gobiernos se reúnen con el presidente de la Corte Internacional de Justicia para discutir la resolución del conflicto por el Esequibo

Los Gobiernos de **Venezuela y Guyana** participaron a mediados de junio en una reunión virtual convocada por el presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Nawaf Salam, para abordar la resolución del conflicto histórico entre ambos países sobre el Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que alberga cuantiosos yacimientos de petróleo y minerales. A pesar de asistir a la reunión, posteriormente el **Gobierno venezolano emitió un comunicado reiterando su posicionamiento de no reconocer la jurisdicción de la CIJ en la resolución de la disputa** y de desconocer cualquier resolución o decisión del tribunal. Caracas también reafirmó que el marco normativo y legal para resolver el contencioso era el llamado Acuerdo de Ginebra de 1966, que preveía una negociación entre las partes para lograr un arreglo aceptable y satisfactorio. En el mismo comunicado, el Gobierno de Maduro hizo público su compromiso de defender la integridad territorial y soberanía venezolana sobre el Esequibo. Por su parte, el Gobierno de Guyana sostiene que el estatus del Esequibo no es objeto de discusión, negociación o deliberación, y que el contencioso territorial entre ambos países debe resolverse exclusivamente en el seno de la CIJ. Guyana, excolonia británica, basa su posición en un Laudo Arbitral emitido en París en 1899 en respuesta a la falta de acuerdo sobre la delimitación fronteriza entre Venezuela y el Imperio Británico, y que adjudicó el Esequibo al Imperio Británico. Además, Guyana considera que tiene el derecho a explotar recursos, expedir licencias y otorgar concesiones en su espacio soberano y ha criticado reiteradamente los permisos concedidos por Caracas a las empresas

petroleras venezolanas para exploración y explotación de petróleo, gas y minerales en el Esequibo.

La reunión auspiciada por la CIJ es la primera tras la cumbre que mantuvieron los presidentes de Guyana y Venezuela a mediados de diciembre en San Vicente y las Granadinas, coorganizada principalmente por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Comunidad del Caribe (CARICOM). En dicha cumbre Guyana y Venezuela se comprometieron a no amenazarse ni utilizar la fuerza mutuamente; a abstenerse, de palabra o de hecho, de intensificar el conflicto y a cooperar para evitar incidentes sobre el terreno que conduzcan a tensiones entre ellos. En las semanas anteriores a dicha cumbre se había producido una escalada regional de la tensión, con la movilización militar de Venezuela, Guyana y algunos países fronterizos como Brasil o Surinam, así como con maniobras militares conjuntas entre Guyana y EEUU.

Aunque tras la cumbre del mes de diciembre se redujo sustancialmente la tensión militar, a mediados de mayo el Gobierno de **Guyana elevó su nivel de alerta después de denunciar un despliegue militar de Venezuela en su frontera común** y una acumulación de tropas y equipamiento bélico en la isla de Ankoko y en la región fronteriza de Puerto Barima. Previamente, en febrero, un conocido y relevante think tank estadounidense (el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales) publicó imágenes por satélite que sugerían que Caracas estaba ampliando sus bases militares en ambas zonas. Por su parte, en mayo el Gobierno de Venezuela declaró que el despliegue operacional terrestre, aéreo y naval en el llamado Frente Atlántico Esequibo era en respuesta a la decisión conjunta de Guyana y EEUU de que dos cazas estadounidenses sobrevolaran sobre Guyana. Caracas también señaló que su sistema de defensa aérea permanecía activo y en alerta ante cualquier intento de violación del espacio geográfico venezolano, incluyendo el Esequibo. A la vez, Nicolás Maduro había acusado a EEUU de haber instalado 26 bases secretas en el territorio en disputa. Por su parte, dirigentes de la oposición venezolana expresaron sus temores de que Maduro pueda utilizar cualquier altercado relacionado con el contencioso territorial con Guyana para suspender las elecciones presidenciales previstas para finales de julio, en las que según algunas encuestas Maduro podría ser derrotado.

Ante la movilización militar por parte de Venezuela, **el vicepresidente de Guyana denunció que tales movimientos contravienen la letra y el espíritu de la declaración que los presidentes de ambos países habían firmado en la cumbre de diciembre de 2023** en San Vicente y las Granadinas. Además, el Gobierno de Guyana puso en estado de alerta a su Ejército, declaró su disposición a defender la integridad territorial y soberanía nacional del país e hizo público su intención de incrementar su colaboración con sus países aliados tradicionales para tal fin.

ASIA y EL PACÍFICO

AFGANISTÁN: Doha III, una victoria talibán a costa de los derechos de las mujeres

CHINA – FILIPINAS: Se incrementa drásticamente la tensión entre ambos países tras un grave incidente naval

TAILANDIA: Se reanuda el proceso de paz en el sur del país

AFGANISTÁN

Doha III, una victoria talibán a costa de los derechos de las mujeres

A finales de junio se celebró la reunión conocida como Doha III, una nueva **conferencia de enviados especiales para Afganistán auspiciada por Naciones Unidas** y que contó con la participación de representantes del Gobierno talibán afgano y de 25 países y organizaciones internacionales. Se trataba de la tercera reunión de estas características, convocada por Naciones Unidas, pero la primera en la que el Gobierno talibán enviaba representación diplomática. En el primero de los encuentros, que tuvo lugar en mayo de 2023, los talibanes no fueron invitados a participar y en el segundo encuentro, celebrado en febrero de 2024, rechazaron la invitación. Las reuniones de enviados especiales tienen como objetivo alcanzar un “enfoque internacional común” sobre la situación del país, en cumplimiento de la **resolución 2721 del Consejo de Seguridad**, en la que se establecía la necesidad de incrementar la participación internacional de Afganistán.

En las semanas previas a la convocatoria de la reunión, se multiplicaron las voces de alarma ante la ausencia de mujeres en la reunión de Doha III y que podría haber sido una de las condiciones impuestas por el régimen talibán para garantizar su presencia en Doha. Tres años después de la toma del poder por parte de los talibanes no solo no se ha registrado ningún avance en la situación de las mujeres en el país sino que, por el contrario, se han multiplicado las medidas regresivas con respecto a los derechos de las mujeres y las niñas, que se han visto completamente privadas de sus derechos políticos, sociales, educativos y económicos. El gobierno talibán ha aprobado múltiples medidas impidiendo el acceso de las adolescentes a la educación e impidiendo la libre circulación de las mujeres en el país y privándolas del derecho al trabajo, entre otros muchos aspectos. En paralelo, activistas y organizaciones de mujeres se han movilizado para promover un reconocimiento jurídico a la situación de “apartheid de género” al que se ven sometidas las mujeres afganas. **Activistas afganas** y organizaciones de derechos humanos internacionales como **Human Rights Watch** y Amnistía Internacional señalaron que la ausencia de las mujeres de la reunión de Doha implicaba un claro incumplimiento de los compromisos internacionales establecidos en la agenda mujeres, paz y seguridad, pero también en la resolución 2721 sobre

Afganistán, en la que se destacaba la relevancia de la participación de las mujeres para la construcción de la paz en el país. La ausencia de representantes de las mujeres en Doha III implica que se ha abierto la posibilidad de transigir con las exigencias de reconocimiento por parte de los talibanes sin que se haya logrado ningún cambio en sus políticas de violación sistemática de los derechos de las mujeres afganas, debilitando así la posición de las organizaciones de mujeres y sus esfuerzos para que la comunidad internacional incremente su presión sobre las autoridades afganas.

La exclusión de las mujeres de Doha III cobra especial relevancia, puesto que entre las condiciones que previamente había expresado el régimen talibán para su participación en la reunión había dos directamente vinculadas a esta cuestión. En primer lugar, que la agenda y la composición de la reunión fuera acordadas con los talibanes y, en segundo lugar, que la educación de las niñas, el empleo de las mujeres y la conformación de un gobierno inclusivo no formaran parte de la agenda de la tercera reunión de Doha. Así pues, los talibanes habrían logrado un importante éxito diplomático al impedir que las mujeres y sus derechos formaran parte de la discusión sobre el futuro político del país. La agenda negociada con los talibanes estuvo conformada por dos cuestiones: la política antinarcótica y el papel del sector privado, dos temas que fueron calificados de “periféricos” por algunas líderes. De hecho, el gobierno talibán centró gran parte de sus intervenciones en la exigencia del levantamiento de sanciones al país y si bien no se ha producido un reconocimiento internacional generalizado de las autoridades talibanes internacionalmente –bloqueado en parte como consecuencia de la situación de las mujeres y las



Fuente: Afghanistan Women's Voice

niñas en el país—, sí se ha avanzado en un reconocimiento de facto y el incremento en las relaciones de los talibanes con diferentes gobiernos. En respuesta a las protestas por parte de las organizaciones de mujeres afganas y de organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas señaló que estaba prevista una reunión con mujeres el día 2 de julio, una vez finalizada la conferencia de Doha III. **Varias mujeres afganas manifestaron públicamente su rechazo a esta reunión** ya que su celebración una vez concluida la cumbre oficial negaba cualquier posibilidad de incidencia sobre el resultado de Doha III.

CHINA – FILIPINAS

Se incrementa drásticamente la tensión entre ambos países tras un grave incidente naval

La tensión entre China y Filipinas se incrementó drásticamente a mediados de junio después de que, según el Gobierno filipino, **barcos de la Guardia Costera china embistieran a varios buques de la marina filipina** en misión de reabastecimiento del barco BRP Sierra Madre, una nave de la Segunda Guerra Mundial varada desde 1999 en el banco de arena Second Thomas Shoal (también conocido como Ayungin en tagalo y Renai en chino, que pertenece al grupo de las Islas Spratly y que se encuentra a unas 100 millas náuticas de la isla de Palawan, Filipinas) para garantizar su control. En dicho incidente, que fue calificado por parte de las Fuerzas Armadas filipinas como la más agresiva de la historia reciente por parte de la Guardia Costera china, **ocho miembros de la tripulación resultaron heridos**, cuatro embarcaciones resultaron dañadas, otra fue remolcada forzosamente, y fueron requisadas de manera coercitiva armas de fuego, alimentos y teléfonos. Pocos días antes, a mediados de junio, Beijing había aprobado una nueva regulación que permite a sus guardacostas interceptar y detener por hasta 60 días embarcaciones y tripulaciones extranjeras sospechosas de invadir o adentrarse en aguas que reclama. Cabe recordar que Beijing reivindica – en la llamada “línea de diez puntos”– una región que abarca aproximadamente el 90% del Mar de la China Meridional.

Tras el incidente, el Gobierno chino declaró que habían sido los buques filipinos en misión de reabastecimiento los que habían impactado deliberadamente con los barcos chinos. Por su parte, tanto el Gobierno como el presidente de Filipinas descartaron explícitamente calificar el incidente como ataque armado por parte de China, evitando la activación del tratado de defensa mutua de 1951 con Estados Unidos. **En varias ocasiones en los últimos años, tanto Filipinas como EEUU han mencionado la vigencia de dicho tratado en referencia a las acciones del Gobierno de China en el Mar de la China Meridional**, que consideran agresivas y tienen por objetivo alterar el estatus quo a través de la coerción

e intimidación militar. A principios de junio, antes del mencionado incidente, la tensión entre China y Filipinas se había incrementado a raíz del bloqueo que barcos chinos habían hecho de una misión de evacuación médica en el bajío Second Thomas. Anteriormente, en mayo, la Guardia Costera de China había dañado, disparándoles cañones de agua, dos barcos filipinos que se dirigían a Scarborough Shoal, un atolón ocupado por Filipinas hasta 2012, cuando un incidente naval entre ambos países derivó en un control de facto del banco de arena desde entonces por parte de China. A mediados de mayo, la guardia costera china afirmó haber ahuyentado a una flotilla de reabastecimiento a pescadores locales en Scarborough Shoal organizada por el grupo civil filipino Atin Ito (“Esto es nuestro”).

Por otra parte, a mediados de junio, las fuerzas navales de **Estados Unidos, Canadá, Japón y Filipinas llevaron a cabo ejercicios marítimos conjuntos** en la Zona Económica Exclusiva de Filipinas. Previamente, a mediados de mayo, Estados Unidos y Filipinas concluyeron los **ejercicios militares anuales de Balikatan**, que se iniciaron a finales de abril e involucraron a más de 16.000 personas.

Ante tal situación, a principios de julio **ambos gobiernos se reunieron en Manila** en el marco de la novena ronda de conversaciones del Mecanismo de Consulta Bilateral para abordar la situación de conflictividad en el Mar de la China Meridional. Aunque tanto Manila como Beijing dejaron claras sus posiciones y reivindicaciones y reafirmaron su intención de seguir protegiendo sus intereses nacionales en la región, ambos coincidieron en la necesidad de restablecer la confianza y **se comprometieron a reducir las tensiones en el Mar de la China Meridional**. Tales declaraciones se produjeron poco después de que el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, el arzobispo Paul Richard Gallagher, en visita a Filipinas, abogara por una resolución pacífica de los conflictos, incluyendo en el Mar Meridional de China, y alentara a las partes en conflicto a respetar el derecho internacional.

TAILANDIA

Se reanuda el proceso de paz en el sur del país

A finales de mayo **el Gobierno y el grupo armado de oposición BRN se reunieron en Kuala Lumpur bajo la facilitación del Gobierno de Malasia** para abordar algunos de los principales aspectos de la agenda sustantiva de las negociaciones, como la reducción o el cese de la violencia en las tres provincias meridionales de mayoría musulmana (Yala, Pattani y Narathiwat) y los mecanismos de supervisión y verificación de dicha reducción. Tras la finalización de la 10ª reunión del comité técnico conjunto de ambas partes, el facilitador de las conversaciones en nombre del Gobierno malasio, Zulfiki

Zainal Abidin, expresó su satisfacción por los resultados y avances de la reunión, así como por el carácter amistoso y constructivo del diálogo. Cabe recordar que el pasado mes de febrero, ambas partes reanudaron el proceso de paz tras un impasse de 12 meses. Además, la ronda de negociación que se celebró entonces era la primera tras casi una década de Junta Militar (2014-2019) o de un gobierno surgido de la misma (2019-2023), de modo que generó ciertas expectativas tanto en Tailandia como entre la comunidad internacional. A modo de ejemplo, a principios de marzo, por primera vez se hizo público un comunicado por parte de las cuatro personas expertas en procesos de paz –de nacionalidad tailandesa, británica, alemana y noruega– que han observado y acompañado el proceso de diálogo desde 2019 para destacar la importancia y significación de los compromisos logrados por las partes hasta el momento y para poner en valor la determinación de las partes en alcanzar un acuerdo político a través del diálogo. Según algunas fuentes, tanto las negociaciones de febrero como las de finales de mayo tenían como principal objetivo el despliegue de una hoja de ruta (denominada oficialmente Plan Global Conjunto hacia la Paz) que se centra principalmente en dos cuestiones: por un lado, la reducción de los niveles de violencia en el sur del país y, por otra parte, las consultas públicas con actores políticos, sociales y religiosos relevantes y representativos en las tres provincias sureñas de mayoría musulmana (Yala, Pattani y Narathiwat) para abordar las soluciones políticas al conflicto y las cuestiones sustantivas de la negociación, como la forma de gobernanza en el sur del país, o aspectos relacionados con la identidad, la religión, la educación, el modelo económico o los derechos humanos.

Respecto de esta última cuestión, cabe señalar que a mediados de junio [una delegación de la Organización de la Conferencia Islámica visitó el sur de Tailandia](#) y se reunió con numerosos representantes religiosos de la región. Según algunos medios, algunos líderes musulmanes solicitaron a la delegación de la OCI (conformada por representantes de Malasia, Brunei Darussalam, Egipto, Nigeria, Pakistán, Maldivas, Irán e Indonesia) que desarrollara una política de paz y resolución de conflictos y que prestara especial atención a los problemas que enfrenta la juventud en el sur de Tailandia.

En relación a las consultas públicas con actores políticos, sociales y religiosos del sur del país, el nuevo

Parlamento surgido de las elecciones generales de mayo de 2023 [estableció un comité ad hoc conformado por 35 miembros de la Cámara de Representantes para elaborar recomendaciones al Gobierno sobre posibles medidas para resolver o gestionar el conflicto](#) en el sur del país (que se originó a principios del siglo XX y resurgió en el año 2004) y también propuestas sobre cómo mejorar el proceso y sistema de consulta y participación de la sociedad civil en la resolución del conflicto. Según algunos análisis, algunas de las propuestas que dicho comité debería presentar en breve al nuevo Ejecutivo recomendarán superar la fase de medidas de fomento de la confianza entre las partes y centrarse en el diseño de políticas que puedan dar salida y satisfacción a las causas que dieron origen a dicho conflicto. En este sentido, algunos representantes en el comité serían más partidarios de ofrecer algún tipo de autonomía o autogobierno a las provincias meridionales, mientras que otras voces consideran que hacer concesiones en esta materia y rebasar el marco de un estado unitario centralizado podría sentar un precedente para otras regiones o minorías en el país. A pesar de que el mencionado comité está liderado por un ex ministro de Educación con buena reputación en Yala, Pattani y Narathiwat, algunos análisis consideran que el periodo de tres meses de mandato concedido al comité es completamente insuficiente para poder identificar y consensuar medidas que puedan suponer un punto de inflexión en el proceso de paz y que puedan vencer las reticencias de determinados sectores en el seno del Estado y de la clase política en Tailandia que ven con reticencia el proceso de negociación y que se oponen a la legitimación política del BRN y a cualquier forma de descentralización del país.

Por otra parte, en los meses de abril, mayo y junio siguieron registrándose numerosos episodios de violencia reivindicados por o atribuidos al BRN. Cabe destacar, por ejemplo, el [estallido de un coche bomba en la provincia de Yala el 30 de junio](#), en el que una maestra murió y otras 21 personas resultaron heridas. Según algunos análisis, tales episodios de violencia pretenden presionar al Gobierno y hacerle notar que, a pesar de la drástica reducción de la violencia que se ha registrado en los últimos años, el BRN todavía mantiene la capacidad militar para confrontar al Estado. Según el centro de investigación Deep South Watch, desde el año 2004 se han registrado más de 22.200 episodios de violencia en el sur del país.

EUROPA

ARMENIA – AZERBAIYÁN: Protestas en Armenia contra el acuerdo de delimitación fronteriza entre Bakú y Ereván, en medio de avances y obstáculos para un acuerdo de paz

CHIPRE: Una nueva iniciativa bicomunal de mujeres hace llamamiento a un rediseño inclusivo del proceso negociador

ARMENIA – AZERBAIYÁN

Protestas en Armenia contra el acuerdo de delimitación fronteriza entre Bakú y Ereván, en medio de avances y obstáculos para un acuerdo de paz

Armenia ha afrontado protestas desde abril contra un acuerdo alcanzado ese mes entre las comisiones para la delimitación fronteriza de Armenia y Azerbaiyán, en el marco del proceso negociador bilateral para la normalización de relaciones y encaminado a la consecución de un acuerdo de paz. Las negociaciones transcurren en un escenario regional transformado desde la toma militar por Azerbaiyán de Nagorno-Karabaj y el éxodo forzado de toda su población armenia en septiembre de 2023. El **pacto del 19 de abril** consiste en un acuerdo preliminar para la demarcación de un tramo de la frontera en torno a la región armenia de Tavush (noreste del país) y el distrito de Qazaj de Azerbaiyán (noroeste). El acuerdo incluía la transferencia a Azerbaiyán de cuatro pueblos tomados por Armenia en la guerra de los años 90 –y abandonados desde entonces–, sin referencias a transferencias de áreas tomadas por Azerbaiyán. El pacto fue valorado positivamente por actores internacionales, como el **secretario general de Naciones Unidas**. El 1 de julio los Gobiernos de Armenia y Azerbaiyán informaron de **nuevos avances** en la delimitación fronteriza.

El acuerdo de abril desencadenó protestas en localidades armenias cercanas a los pueblos que se transferirán, y movilizaciones también en la capital, Ereván, – que reunieron entre algunos cientos y varios miles de manifestantes, según días y fuentes. **Las críticas** enarboladas en las protestas incluían algunos temores de seguridad, impactos en infraestructuras y rechazo a lo que consideran concesiones unilaterales y humillación, en un contexto aún marcado por la ofensiva militar azerbaiyana de 2023 en Nagorno-Karabaj y el auge del nacionalismo en ambos países. Las protestas fueron en parte movilizadas por el movimiento “Tavush por la Patria” –y con el liderazgo del **arzobispo Bagrat Galstanián**–, que reclama la dimisión del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y su sustitución por Galstanián. El Gobierno armenio rechazó las críticas y defendió el acuerdo como un pacto necesario para garantizar el futuro de Armenia. Las protestas en la capital fueron consideradas las más numerosas desde la llamada Revolución de Terciopelo de 2018 –que llevó al poder a Pashinián. El contexto de fragilidad de la oposición parlamentaria situaba al movimiento Tavush sin apoyos suficientes para promover la destitución de Pashinián. Entre las jornadas de protesta,

la del día 12 de junio –en que manifestantes trataron de bloquear el acceso al Parlamento– fue respondida por la policía con uso de granadas aturridoras y se produjeron choques. Al menos 110 personas requirieron de asistencia médica. **Amnistía Internacional** llamó a las autoridades a investigar los hechos.

El pacto fronterizo se enmarca en el proceso negociador de normalización de relaciones entre Armenia y Azerbaiyán. Además de los avances en la delimitación fronteriza, Pashinián afirmó en junio que **Armenia estaba preparada** para poder firmar un acuerdo de paz en un mes y señaló convergencia entre los principios defendidos por ambos países. También el secretario de Estado de EEUU, **Antony Blinken**, destacó que era alcanzable un acuerdo de paz.

No obstante, el proceso continuó haciendo frente a obstáculos e incerteza. En los últimos meses Azerbaiyán reiteró la **imposibilidad de alcanzar un acuerdo** de paz si Armenia no realizaba cambios en su Constitución y eliminaba las referencias a lo que Bakú considera aspiraciones territoriales sobre Azerbaiyán. La Carta Magna armenia incluye referencias a la Declaración de Independencia de Armenia de 1990 que, a su vez, alude a una resolución conjunta de 1989 de la antigua República Socialista Soviética de Armenia y del antiguo Consejo Nacional de Karabaj sobre la “reunificación” de ambos territorios. En todo caso, podría darse paso a cierto acercamiento entre Armenia y Azerbaiyán en este ámbito. Medios armenios informaron en junio de que el primer ministro del país había emitido un decreto en mayo instando a la preparación de una nueva Constitución para finales de 2026. **Según análisis**, desde el cambio de poder en 2018 el Gobierno aspiraba a introducir modificaciones constitucionales, aparcadas por la pandemia, el conflicto con Azerbaiyán y las elecciones anticipadas. Desde inicios de año **se intensificó el debate sobre los cambios constitucionales**, en el contexto de mayor presión de Azerbaiyán. Con el nuevo decreto, está por ver cómo se interrelacionarán el proceso de nueva Constitución y las negociaciones con Azerbaiyán y qué grado de respaldo social tendrán.

Por otra parte, en los últimos meses se produjeron algunos incidentes de violencia fronterizos y acusaciones mutuas. Armenia propuso en junio a Azerbaiyán la creación de un **mecanismo bilateral de investigación** de violaciones del alto el fuego. Bakú no ha respondido a la propuesta. Otros obstáculos hacen referencia a la confrontación geopolítica en la región, incluyendo la pugna entre Rusia y la UE, tensiones entre Azerbaiyán y la UE y algunos de sus Estados miembro, como Francia –incluyendo

en relación a la **venta de armamento a Armenia**–, y el distanciamiento entre Rusia y Armenia. En abril Moscú inició la retirada de las tropas de mantenimiento de la paz de Nagorno-Karabaj y finalizó también el centro conjunto ruso-turco de supervisión del alto el fuego de 2020, reforzando la posición de control militar de Azerbaiyán sobre el territorio. Por otra parte, el proceso negociador siguió sin abordar cuestiones relativas a verdad, memoria, justicia transicional y seguridad humana, y con **escasas perspectivas de retorno** seguro para la población armenia desplazada en 2023, mientras análisis señalaron la **destrucción en Nagorno-Karabaj** de edificios residenciales y patrimonio cultural.



Fuente: UN Photo/Eskinder Debebe

CHIPRE

Una nueva iniciativa bicomunal de mujeres llama a un rediseño inclusivo del proceso negociador, en un contexto de creciente frustración por el estancamiento del diálogo

La Coalición Bicomunal de Mujeres de Chipre (CWBC, por sus siglas en inglés), **nueva iniciativa creada en abril** por mujeres de la isla para la promoción de una solución inclusiva al conflicto, alerta del estancamiento de la situación y hace un **llamamiento al secretario general** de la ONU, António Guterres, a un rediseño de las negociaciones, de manera que el proceso no recaiga solo en la responsabilidad de los dos líderes de la isla, sino que adopte un enfoque más participativo y transparente. Este y otros llamamientos e **iniciativas de la sociedad civil** chipriota llegan en una fase de especial preocupación por el bloqueo del proceso negociador. En esa línea, el nuevo informe del secretario general de la ONU sobre la misión de buenos oficios, de julio, señaló la **creciente frustración** con el estatus quo en la isla por parte de muchos sectores.

El informe del secretario general de Naciones Unidas sobre su misión de buenos oficios en Chipre –que cubre el periodo entre el 13 de diciembre de 2023 y el 12 de junio de 2024– reitera llamamientos anteriores a un mayor involucramiento con la sociedad civil y a promover los contactos entre las dos poblaciones de la isla. El secretario general llama también a los dos líderes de la isla a abordar y acordar medidas de confianza mutuamente aceptables que puedan contribuir a un clima más favorable a la resolución del conflicto. Por otra parte, el informe de buenos oficios, así como el informe del secretario general sobre las actividades de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), también de julio, alertaron de las violaciones del estatus de la zona de amortiguación por ambas partes, incluyendo mediante un incremento de construcciones permanentes de carácter militar no autorizadas y un número récord de incursiones en la zona. El secretario general de la ONU subrayó también la necesidad de que las partes se abstengan de acciones unilaterales que pueden aumentar la tensión y perjudicar un reinicio del proceso negociador.

En paralelo, en lo que algunos medios calificaron de **carta de despedida** de la enviada personal para Chipre del secretario general de la ONU, María Ángela Holguín Cuéllar, la diplomática colombiana llamó a promover nuevas ideas para lograr una salida al conflicto e instó a la población chipriota a animar y presionar a sus líderes para trabajar para “un futuro mejor”. Holguín Cuéllar señaló la importancia de alejarse de soluciones del pasado que generaron expectativas no cumplidas, mayores desacuerdos y frustración. La enviada personal fue designada en enero para el cargo con el fin de identificar si existía una base común sobre cómo avanzar en la cuestión chipriota. El liderazgo chipriota desde un inicio señaló que su aceptación de esta figura estaba condicionada a un mandato limitado a seis meses. En las últimas semanas sectores de la sociedad civil habían expresado preocupación por una posible no renovación de la enviada personal, ante la falta de acuerdo entre los líderes para reanudar las negociaciones. En una carta enviada a finales de junio al secretario general de la ONU, la coalición de mujeres CWB había instado a Guterres a tomar una “decisión valiente” que extendiera el mandato de Holguín Cuéllar con el fin de facilitar un tiempo adicional para intensificar los esfuerzos de todas las partes. Holguín Cuéllar presentaba el 10 de julio al secretario general el informe sobre su labor diplomática y está previsto que Guterres decida en los próximos meses sobre los próximos pasos sobre la cuestión chipriota. Algunos medios apuntaron a que la misión de la enviada **será dada por finalizada** en unos meses. En todo caso, en su carta Holguín Cuéllar afirmaba que su compromiso con Chipre no finalizaba con la presentación de su informe a Guterres y que seguirá “pensando opciones para una solución para una solución duradera”.

En relación a las actividades recientes de Holguín Cuéllar, en mayo la enviada especial llevó a cabo su tercera visita oficial a la isla, en la que se reunió por separado con los dirigentes grecochipriota y turcochipriota, así como con líderes políticos y representantes de la sociedad civil. También mantuvo reuniones en Ankara, Atenas y Bruselas. Medios de comunicación informaron del **rechazo del líder turcochipriota**, Ersin Tatar, a la propuesta de Holguín de una reunión trilateral entre la enviada especial, Tatar

y el líder grecochipriota Nikos Christodoulides. En un comunicado, Tatar señaló que había reiterado a la enviada especial su visión de solución de dos Estados, así como su posición –expresada ya en las reuniones de las dos visitas anteriores– favorable a un nuevo proceso formal solo si se dan pasos iniciales de levantamiento del aislamiento impuesto a la parte turco-chipriota y de reafirmación de su soberanía. Por su parte, al respecto de las demandas turcochipriotas de comercio y vuelos directos, el presidente grecochipriota afirmó que **no eran demandas aceptables**.

En conjunto, el conflicto atraviesa una situación de fuerte estancamiento y posiciones contrapuestas tanto respecto a la visión de solución, como a los requisitos para el reinicio de las negociaciones formales. La posición del liderazgo turcochipriota desde la subida al poder en 2020 de Ersin Tatar ha sido la defensa de una solución de dos Estados, apoyada por Türkiye, y que entra en antagonismo con el horizonte de solución de república federal bicomunal y bizonal, que ha sido hasta ahora el marco de Naciones Unidas y que defiende también la parte grecochipriota.

ORIENTE MEDIO

IRÁN: Se impone el candidato moderado en las elecciones presidenciales en un contexto regional de intensa tensión con Israel

ISRAEL – HEZBOLLAH: La intensificación de hostilidades y de la retórica amenazante agravan riesgo de escalada

IRÁN

Se impone el candidato moderado en las elecciones presidenciales en un contexto regional de intensa tensión con Israel

Irán atravesó un trimestre convulso y de intensos acontecimientos a nivel internacional y cambios en el ámbito interno: una confrontación directa inédita con Israel en el marco de la intensificación de tensiones regionales por la crisis en Gaza, la posterior muerte del presidente iraní tras la caída del helicóptero en que viajaba y unas elecciones avanzadas para escoger al reemplazante del fallecido mandatario que desembocaron en el triunfo del candidato reformista. El período se inició con unas hostilidades sin precedentes entre Irán e Israel, que tras años de confrontación indirecta –ataques no reivindicados oficialmente contra intereses iraníes y personas vinculadas al régimen, en el caso de Israel; y a través de acciones de actores armados foráneos bajo su órbita de influencia, en el caso de Irán– pasaron a un enfrentamiento directo. La escalada se produjo después de que, el 1 de abril, un ataque aéreo contra el consulado iraní en Damasco (Siria) causara la muerte de dos altos cargos de la Guardia Republicana y de otros cinco funcionarios iraníes. Tras la ofensiva contra la sede diplomática, ampliamente atribuida a fuerzas israelíes, Teherán lanzó el 13 de abril una acción masiva de represalia con misiles de crucero y más de 300 drones (operación “Promesa Verdadera”) en su primer ataque directo a Israel desde la instauración de la república islámica. Análisis subrayaron que la escalada suponía un **punto de inflexión en la rivalidad entre Irán e Israel**, ya que los ataques mutuos directos y públicos supusieron cruzar líneas rojas peligrosas con consecuencias potencialmente desestabilizadoras para toda la región en un momento de gran tensión e incertidumbre.

Se ha interpretado que, con su ataque, el Gobierno de Israel buscaba una respuesta de Irán que le permitiera desviar la atención de la situación en Gaza, usar la amenaza iraní para sortear las críticas internas y externas y el parcial aislamiento internacional y, eventualmente, implicar a EEUU y otros actores en una guerra regional de mayor alcance. En el caso de Irán, Teherán habría intentado ofrecer una respuesta inequívoca –que pudiera satisfacer a su opinión pública interna y a sus aliados regionales– sin que ésta desembocara en una escalada mayor. Pese a su magnitud y espectacularidad, la operación iraní fue ampliamente anunciada y causó daños limitados en Israel, que contó con el apoyo de otros actores (EEUU, Reino Unido y Jordania, entre otros) para interceptar los proyectiles y drones lanzados por Teherán. Irán declaró por concluida su respuesta, advirtió que un nuevo ataque israelí conduciría a nuevas represalias e insinuó que una acción contra sus instalaciones atómicas conduciría a Teherán a una reconsideración de sus políticas en el ámbito nuclear. Aunque Israel lanzó otro ataque contra la ciudad de Isfahan días más tarde (19 de abril), Teherán restó importancia a los hechos y no dio señales de impulsar nuevas acciones.

En este trasfondo de tensión regional, semanas más tarde se produjo la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi, del ministro de Exteriores y otras seis personas en un accidente de helicóptero. Las especulaciones iniciales sobre una posible responsabilidad de Israel en los hechos fueron descartadas y se inició el proceso para escoger al sucesor de Raisi, mandatario del ala más conservadora del régimen y figura clave en la represión contra la contestación popular en el país en los últimos años. Las autoridades de la república islámica permitieron la concurrencia de cuatro candidatos, todos hombres, miembros del establishment y considerados leales al régimen, y la primera ronda de los comicios tuvo lugar el 28 de junio. La baja tasa de

participación en las elecciones –39% y por consiguiente una **tasa récord de abstención**– fue interpretada como un reflejo del desencanto y escepticismo de la población. La segunda ronda electoral el 5 de julio contó con una mayor participación –49%, aun así la segunda más baja– y confirmó como vencedor al candidato moderado Masoud Pezeshkian, que se impuso al ultraconservador Saeed Jalilí. Cirujano, ex ministro de Salud durante el Gobierno de Mohamed Khatami y parlamentario desde 2008, Pezeshkian habría conseguido atraer voto de sectores descontentos a través de un mensaje de acercamiento a Occidente, un discurso crítico con aspectos de las políticas para imponer el velo a las mujeres y la represión de voces disidentes, una defensa de los derechos de las minorías étnicas –él tiene ascendencia azerí y kurda– y promesas de una aproximación pragmática a las estancadas negociaciones sobre el programa nuclear iraní para aliviar las sanciones impuestas a Teherán. Algunos sectores se habrían movilizado también por temor a una presidencia continuista de línea dura de la mano de Jalilí, una figura cercana al fallecido mandatario Raisi. Las perspectivas sobre la capacidad de Pezeshkian para influir en un cambio en las dinámicas internas y las relaciones internacionales de Irán son aún inciertas, teniendo en cuenta la **oposición y resistencias que previsiblemente afrontará de sectores ultraconservadores del régimen** y que por las singularidades del sistema político iraní y sus diferentes centros de poder, las competencias presidenciales son limitadas. En materias como política exterior –incluyendo el tema nuclear y las relaciones de Irán con milicias de la región– la última palabra la tiene el líder supremo, Alí Jamenei.

ISRAEL – HEZBOLLAH

Intensificación de hostilidades y retórica amenazante agravan riesgo de escalada

Bajo el trasfondo de la crisis de Gaza, durante el trimestre se acrecentó la preocupación por la posibilidad de una confrontación abierta y de mayor magnitud a nivel regional y también en lo que respecta a Israel y Hezbollah. Los intercambios de fuego prácticamente diarios entre fuerzas israelíes y las del grupo shií libanés y otras organizaciones armadas con base en el país, el aumento en la gravedad y alcance geográfico de las hostilidades, el uso de armamento más sofisticado y las amenazas mutuas que se acrecentaron a lo largo del periodo continuaron generando alarma. Los balances de letalidad incluyen combatientes y civiles a ambos lados de la línea fronteriza, la llamada Línea Azul. Según datos difundidos por Naciones Unidas, hasta mediados de junio la escalada había provocado la **muerte de 25 israelíes, mientras que otras 401 personas habían muerto por los ataques israelíes en Líbano**, incluyendo periodistas y personal de salud. La violencia también ha causado la destrucción de numerosas infraestructuras e incendios, así como desplazamientos forzados de unas 90.000 personas en Líbano y otras 60.000 en Israel. Según un informe de Human Rights Watch dado a conocer

a principios de junio, la extendida **utilización por parte de Israel de fósforo blanco en la zona sur de Líbano** expone a la población civil de la zona a severos riesgos y está siendo un factor relevante para motivar desplazamientos forzados. Los informes periódicos de Naciones Unidas sobre la implementación de la resolución 1701 –aprobada en 2006 y que llama al cese de hostilidades tras la guerra entre Israel y Hezbollah– también han alertado sobre la contaminación con material explosivo de nuevas áreas a lo largo de la línea fronteriza, con los consiguientes riesgos para la población civil.

En abril las hostilidades estuvieron marcadas por el enfrentamiento abierto y sin precedentes entre Israel e Irán, tras el ataque israelí en el consulado iraní en Damasco (Siria). Así, en paralelo a la operación de represalia directa y de inédita magnitud de Teherán contra Israel a mediados de ese mes, Hezbollah lanzó también ataques contra objetivos israelíes en los Altos del Golán y posteriormente alcanzó también a localidades como Acre. Las autoridades israelíes anunciaron en mayo que habían dado muerte a cerca de 300 efectivos de Hezbollah desde octubre, entre ellos diversos altos cargos del grupo. En junio los ataques y amenazas se agudizaron. Tras un ataque israelí en el que murió Taleb Abdallah, descrito como la figura de mayor rango de Hezbollah fallecida desde la escalada de octubre de 2023, la milicia shií lanzó unos 250 cohetes al norte de Israel, contra nueve emplazamientos militares y contra aparatos aéreos israelíes. A finales de junio las hostilidades volvieron a intensificarse después de que un nuevo ataque israelí cerca de la ciudad de Tiro resultara en la muerte del comandante Mohammed Nasser, otro de los máximos cargos militares de Hezbollah fallecidos en el marco de la confrontación con Israel en los últimos meses. La milicia shií libanesa respondió entonces con ataques a bases militares israelíes en los Altos del Golán ocupados y en Kiryat Shmona y aseguró haber disparado 200 proyectiles contra Israel, en otro de sus ataques más masivos.

La escalada verbal también contribuyó a tensionar la región. Netanyahu y otros altos cargos israelíes aseguraron que estaban preparados para una operación militar de envergadura y que los planes operativos para una ofensiva en Líbano ya estaban aprobados. El ministro de Defensa israelí amenazó incluso con llevar a Líbano a “la edad de piedra” en caso de una nueva guerra. El líder de Hezbollah, jeque Hassan Nasrallah, por su parte, lanzó advertencias sobre una guerra sin contención ni límites e incluso alertó a Chipre –ubicada a unos 200 kilómetros de Líbano– de que sería objeto de ataques si abría sus bases y aeropuertos a Israel. Irán también se involucró en esta retórica, advirtiendo a Israel sobre las consecuencias de un eventual ataque total contra Líbano. La deriva llevó a que los máximos responsables de la misión de la ONU en Líbano hicieran un llamamiento a las partes a evitar que un error de cálculo pudiera desembocar en una catástrofe. El secretario general de la ONU también ha insistido en llamar a las partes en conflicto en la región a la máxima contención para evitar a un deterioro aún mayor de la situación.

Pese a estas dinámicas de escalada durante el último trimestre, las renovadas expectativas sobre un posible acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas a principios de julio volvieron a poner sobre la mesa también un eventual cese de las hostilidades en la zona fronteriza entre Israel y Líbano (véase el tema destacado sobre Palestina-Israel en este informe). El grupo libanés ha insistido en el pasado en que sus ofensivas son en solidaridad con Hamas y que, por tanto, un cese del fuego en Gaza conduciría a una suspensión de sus ataques a Israel desde Líbano. Altos cargos de Hezbollah han asegurado que el grupo no persigue una guerra total con Israel, pero que está preparado para los escenarios más extremos. En el caso de Israel, diversos análisis subrayan que el Gobierno de Netanyahu enfrenta presiones de algunos sectores para confrontar de una manera más contundente a Hezbollah. Ministros del ala más radical del

gobierno como el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich han planteado que Israel debería ocupar el sur de Líbano si Hezbollah no se repliega al norte del río Litani. En paralelo a las iniciativas de mediación para abordar la crisis en Gaza, durante el trimestre también continuaron las gestiones para intentar una desescalada entre Israel y Hezbollah. **Francia y EEUU son dos de los actores que se han involucrado más activamente en los intentos de mediación.** Según trascendió, las propuestas se han focalizado en restablecer el cese de hostilidades entre Israel y Hezbollah y en un eventual repliegue del grupo shií en paralelo a un despliegue de las Fuerzas Armadas libanesas en la zona fronteriza. Hezbollah pretendería que Israel se repliegue en una distancia equivalente de la Línea azul, según fuentes próximas al grupo. El Gobierno francés habría promovido el establecimiento de un grupo de contacto trilateral que fue rechazado por Israel.



Esta publicación está sujeta a una licencia de Creative Commons. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja la opinión de la ACCD ni de la Generalitat de Catalunya.

ecp escola de
cultura de pau

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

Escola de Cultura de Pau

Edifici B13, Carrer de Vila Puig,
Universitat Autònoma de Barcelona 08193
Bellaterra (Espanya)
Tel: +34 93 581 14 14
pr.conflictes.escolapau@uab.cat
escolapau.uab.cat

Con el apoyo de:

